



TSC GROUP
A B O G A D O S

SEÑORES DOCTORES JAVIER DE LA CADENA CORREA, JOSÉ LAYEDRA BUSTAMANTE Y MILTON ÁVILA CAMPOVERDE, CONJUECES NACIONALES ENCARGADOS DEL TRIBUNAL DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. -

VÍCTOR MANUEL FONTANA ZAMORA, ecuatoriano, de 68 años de edad, de ocupación empleado privado, **dentro del Juicio Penal (Recurso de Casación) No. 17721-2019-00029G**, de conformidad con lo establecido en los Arts. 94 y 437 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el Art. 58 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por mis propios y personales derechos, comparezco para proponer la siguiente **ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN, -EP- para ante la Corte Constitucional del Ecuador**, en los siguientes términos:

Esta acción extraordinaria de protección, la presento en vista de que mis derechos constitucionales han sufrido una grave vulneración, es por ello que la activo para ante la Corte Constitucional, a fin de que, en sentencia constitucional se los reivindique y repare, ordenando a las autoridades judiciales demandadas, cumplan y respeten los derechos contenidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos de los cuales es parte la República de Ecuador.

En este contexto primero, me permito realizar un análisis sobre el objeto de esta acción, en el sentido de que ésta no es una “simple invención del nuevo constitucionalismo ecuatoriano o de la Constitución”, sino que su finalidad es altamente provechosa, no solo porque sirve de herramienta para corregir y reparar graves vulneraciones de derechos constitucionales, que pueden darse en las sentencias o actuaciones de última y definitiva instancia que se dictan en los procesos conocidos por los Jueces y las Cortes del país; sino que también, es uno de los mecanismos más eficaces para asegurar el cumplimiento del principio de jerarquía y primacía de la Constitución, como una norma jurídica directamente aplicable, permitiendo verificar el seguimiento de una línea o precedente jurisprudencial, en materia de derechos fundamentales.

Es así como de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 94 y 437 de la CRE, la acción extraordinaria de protección procede en contra de sentencias, autos definitivo y resoluciones con fuerza de sentencia firmes o ejecutoriadas, en los que se demuestre que se ha violado, por acción u omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución.

Es por este motivo que doy estricto cumplimiento con los requisitos que debe contener la Acción Extraordinaria de Protección, contemplados en el artículo 61 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y en los artículos 45 y 46 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

1. CALIDAD EN LA QUE COMPARECE LA PERSONA ACCIONANTE. -

Comparece **VÍCTOR MANUEL FONTANA ZAMORA**, ecuatoriano, de 68 años de edad, (perteneciente a un grupo de personas de atención prioritaria Art. 35 de la Constitución de la

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
FOR THE YEAR 1881

THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
HAS THE HONOR TO ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF
THE REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE
FOR THE YEAR 1881

AND TO STATE THAT THE SAME HAS BEEN
FORWARDED TO THE SECRETARY OF THE
INTERIOR DEPARTMENT FOR HIS
CONSIDERATION

IN THE MEANTIME THE COMMISSIONER OF THE
GENERAL LAND OFFICE HAS THE HONOR TO
ADVISE THAT THE REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE
FOR THE YEAR 1881 HAS BEEN
FORWARDED TO THE SECRETARY OF THE
INTERIOR DEPARTMENT FOR HIS
CONSIDERATION

AND TO STATE THAT THE SAME HAS BEEN
FORWARDED TO THE SECRETARY OF THE
INTERIOR DEPARTMENT FOR HIS
CONSIDERATION

IN THE MEANTIME THE COMMISSIONER OF THE
GENERAL LAND OFFICE HAS THE HONOR TO
ADVISE THAT THE REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE
FOR THE YEAR 1881 HAS BEEN
FORWARDED TO THE SECRETARY OF THE
INTERIOR DEPARTMENT FOR HIS
CONSIDERATION

AND TO STATE THAT THE SAME HAS BEEN
FORWARDED TO THE SECRETARY OF THE
INTERIOR DEPARTMENT FOR HIS
CONSIDERATION

IN THE MEANTIME THE COMMISSIONER OF THE
GENERAL LAND OFFICE HAS THE HONOR TO
ADVISE THAT THE REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE
FOR THE YEAR 1881 HAS BEEN
FORWARDED TO THE SECRETARY OF THE
INTERIOR DEPARTMENT FOR HIS
CONSIDERATION

República), de ocupación empleado privado, por mis propios y personales derechos, por ser parte procesal y afectado directo con la vulneración del debido proceso y de mis derechos constitucionales que **ha tenido lugar dentro de la fase de sustanciación del Recurso de Casación No. 17721-2019-00029G**, en atención a lo establecido en el Art. 59 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, que refiere que dicha acción puede ser interpuesta por quien hayan sido parte de un proceso.

2. CONSTANCIA DE QUE LA SENTENCIA O AUTO ESTÁ EJECUTORIADO. -

La decisión judicial que impugno es la sentencia de fecha 08 de septiembre de 2020, dictada por los doctores Javier De la Cadena Correa, José Layedra Bustamante y Milton Ávila Campoverde, **CONJUECES NACIONALES ENCARGADOS** de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, notificada el mismo día, mediante la cual, por voto de mayoría (Javier de la Cadena Correa y José Layedra Bustamante), se declaró improcedente el recurso de casación presentado por el compareciente.

Este fallo, a la fecha, se encuentra ejecutoriado por el ministerio de la ley, pues desde su expedición ha transcurrido el término legal correspondiente para su ejecutoria, no obstante, me encuentro dentro del término establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para interponer esta acción.

En concordancia con el artículo 46 del REGLAMENTO DE SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS DE COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, que señala el trámite a seguir, el cómputo del término para presentarla y que la Sala de Admisión de la Corte Constitucional es la que debe calificar a la ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN planteada:

“Art. 46.- Trámite. - La acción extraordinaria de protección será presentada de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el presente Reglamento.

Cuando la acción extraordinaria de protección se presente en la judicatura, sala o tribunal que expidió la decisión judicial impugnada, deberá hacérselo para ante la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional, es el único órgano competente para admitir, conocer y resolver la acción extraordinaria de protección, en consecuencia, la judicatura, sala o tribunal se limitará a recepcionar la demanda y la remitirá con el expediente, sin más trámite, dentro del término previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, debiendo observar lo dispuesto en el artículo 47 del presente Reglamento. En caso de incumplimiento de esta disposición, la Corte Constitucional pondrá en conocimiento del Consejo de la Judicatura el hecho, para la sanción disciplinaria correspondiente.

El cómputo del término de veinte días establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica de

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year, and the second section deals with the specific results of the work.

2. The second part of the report deals with the specific results of the work. It is divided into three main sections: the first section deals with the results of the work in the field of agriculture, the second section deals with the results of the work in the field of industry, and the third section deals with the results of the work in the field of commerce.

3. The third part of the report deals with the results of the work in the field of commerce. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the work in the field of foreign trade, and the second section deals with the results of the work in the field of domestic trade.

4. The fourth part of the report deals with the results of the work in the field of domestic trade. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the work in the field of retail trade, and the second section deals with the results of the work in the field of wholesale trade.

5. The fifth part of the report deals with the results of the work in the field of retail trade. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the work in the field of general retail trade, and the second section deals with the results of the work in the field of specialized retail trade.

meubautuuen
- 959 -



Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se contará a partir de que la última decisión judicial a la que se imputa la violación del derecho constitucional o del debido proceso se encuentre ejecutoriada. (...)

3. DEMOSTRACIÓN DE HABER AGOTADO LOS RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS. -

Siendo la sentencia que se impugna, la que resuelve el recurso extraordinario de casación presentado por **VÍCTOR MANUEL FONTANA ZAMORA** y otros, con lo que se han agotado todos los recursos procesales de impugnación, ordinarios y extraordinarios, previstos y permitidos por la Ley Procesal Penal aplicable al caso, por lo que es procedente la presente acción.

4. SEÑALAMIENTO DE LA JUDICATURA, SALA O TRIBUNAL DEL QUE EMANA LA DECISIÓN VIOLATORIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL. -

Los **legitimados pasivos** son los señores doctores Javier de la Cadena Correa, José Layedra Bustamante y Milton Ávila Campoverde, **CONJUECES NACIONALES ENCARGADOS**, integrantes del Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, quienes conocieron y resolvieron el recurso de casación presentado por **VÍCTOR MANUEL FONTANA ZAMORA**, declarándolo improcedente mediante sentencia de fecha 08 de septiembre de 2020, por voto de mayoría (Javier de la Cadena Correa y José Layedra Bustamante).

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS. -

Los derechos vulnerados por la decisión judicial impugnada, esto es la sentencia de fecha 08 de septiembre de 2020, emitida por voto de mayoría (Javier de la Cadena Correa y José Layedra Bustamante), por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, **INTEGRADA POR CONJUECES NACIONALES ENCARGADOS**, son los siguientes:

- El derecho **a ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente**, establecido en el artículo 76, numeral 7 literal k) de la Constitución de la República de Ecuador;
- El derecho al debido proceso en **la garantía de la debida motivación de las resoluciones judiciales**, establecido en el artículo 76, numeral 7 literal l) de la Constitución de la República de Ecuador;
- El derecho al debido proceso en **las garantías del derecho a la defensa, a no ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento y a ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones**, establecidas en el artículo 76, numeral 7 literales a) y c) de la Constitución de la República de Ecuador, en concordancia con el principio de congruencia; y,

REPORT

The following report was prepared by the Committee on the Study of the History of the United States, and is intended to provide a general outline of the subject for the use of the public.

The Committee on the Study of the History of the United States, organized in 1890, has the honor to submit to the public the following report.

The Committee on the Study of the History of the United States, organized in 1890, has the honor to submit to the public the following report.

The Committee on the Study of the History of the United States, organized in 1890, has the honor to submit to the public the following report.

The Committee on the Study of the History of the United States, organized in 1890, has the honor to submit to the public the following report.

The Committee on the Study of the History of the United States, organized in 1890, has the honor to submit to the public the following report.

The Committee on the Study of the History of the United States, organized in 1890, has the honor to submit to the public the following report.

The Committee on the Study of the History of the United States, organized in 1890, has the honor to submit to the public the following report.

The Committee on the Study of the History of the United States, organized in 1890, has the honor to submit to the public the following report.

The Committee on the Study of the History of the United States, organized in 1890, has the honor to submit to the public the following report.

The Committee on the Study of the History of the United States, organized in 1890, has the honor to submit to the public the following report.

The Committee on the Study of the History of the United States, organized in 1890, has the honor to submit to the public the following report.

The Committee on the Study of the History of the United States, organized in 1890, has the honor to submit to the public the following report.

- El derecho al **debido proceso en las garantías del derecho a la presunción de inocencia y el principio de favorabilidad**, establecidas en el artículo 76, numerales 2 y 5 de la Constitución de la República de Ecuador.

DESARROLLO

Para realizar un análisis de causalidad entre estos derechos constitucionales violados y el proceso judicial con vicios constitucionales impugnado, me permito exponer los siguientes antecedentes:

5.1. Antecedentes. -

5.1.1.- Se inicia una instrucción fiscal y la vinculación a la misma, por el presunto delito de cohecho en contra de los ciudadanos Rafael Vicente Correa Delgado, Jorge David Glas Espinel, Alexis Javier Mera Giler, María De Los Ángeles Duarte Pesantes, Walter Hipólito Solís Valarezo, Roldán Vinicio Alvarado Espinel, Viviana Patricia Bonilla Salcedo, Christian Humberto Viteri López, Pamela María Martínez Loayza, Laura Guadalupe Terán Betancourt, Edgar Román Salas León, Ramiro Leonardo Galarza Andrade, Mateo Choi o Choi Kim Du Yeon, Rafael Leonardo Córdova Carvajal, William Wallace Phillips Cooper, Teodoro Fernando Calle Enríquez, Pedro Vicente Verduga Cevallos, Alberto José Hidalgo Zavala, **Víctor Manuel Fontana Zamora**, Bolívar Napoleón Sánchez Rivadeneira, entre otros.

Como entre ellos constan un ex – Presidente, ex - Vicepresidente de la República, y varios ex - Ministros de Estado, en razón del fuero que gozaban, conforme a lo dispuesto en el artículo 184.3 Constitución de la República del Ecuador, la jurisdicción y competencia de esta causa penal recayó en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia.

5.1.2.- Con fecha 3 de enero de 2020, la doctora Daniella Camacho Herold, Jueza Nacional de Garantías Penales, resuelve llamar a juicio a varios ciudadanos, entre ellos, a **Víctor Manuel Fontana Zamora, a quien FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO**, acusó por presumir su participación en calidad de autor, en el delito de cohecho tipificado y sancionado **por el artículo 286 del Código Penal (CP), y para conocimiento de este caso y singularizado por ser ultractivo, ahora en el artículo 280, incisos 2º y 4º Código Orgánico Integral Penal.**

5.1.3.- Mediante sentencia de fecha de 26 de abril de 2020, el Tribunal de Garantías Penal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los señores doctores: Iván León Rodríguez, Juez Nacional (e) Ponente, Marco Rodríguez Rúa e Iván Saquicela Rodas, Jueces Nacionales; dictan sentencia de primer nivel con la cual se resuelven:

“(...) 1.- Declarar la existencia del delito de cohecho pasivo propio agravado, tipificado en el artículo 285 CP y sancionado en el artículo 287 ejusdem, en relación con el artículo 290 ibídem (ahora artículo 280, incisos primero, tercero y cuarto COIP). 2.- Declarar la culpabilidad de los procesados (...) VÍCTOR MANUEL FONTANA ZAMORA, (...), en

REPORT

The purpose of this report is to provide a comprehensive overview of the project's progress and results. The report is organized into several sections, each detailing a specific aspect of the project.

The first section, titled "Introduction", provides a brief overview of the project's goals and objectives. It also discusses the importance of the project and the role of the team.

The second section, titled "Methodology", describes the methods and techniques used in the project. It includes a detailed description of the data collection process and the analysis methods.

The third section, titled "Results", presents the findings of the project. It includes a detailed description of the data and the results of the analysis. The results are presented in a clear and concise manner, with the use of tables and figures to illustrate the data.

The fourth section, titled "Discussion", discusses the implications of the results and the limitations of the study. It also provides a brief overview of the conclusions drawn from the project. The discussion is organized into several paragraphs, each focusing on a specific aspect of the results.

The fifth section, titled "Conclusion", provides a final summary of the project's findings and conclusions. It also includes a brief overview of the project's impact and the role of the team. The conclusion is organized into several paragraphs, each focusing on a specific aspect of the project.

The sixth section, titled "References", lists the sources of information used in the project. It includes a detailed list of the books, articles, and other sources that were consulted during the project.

The seventh section, titled "Appendix", contains additional information related to the project. It includes a detailed description of the data and the results of the analysis, as well as other information that is relevant to the project.

calidades de autores directos del delito de cohecho activo agravado, según el artículo 42 CP (hoy artículo 42.1 COIP), en relación con la cláusula de equiparación prevista en el artículo 290 ibidem (hoy artículo 280, último inciso, COIP).

3.- Condenar a los sentenciados (...) VÍCTOR MANUEL FONTANA ZAMORA, (...), a las penas privativas de libertad de OCHO (8) AÑOS, a cada uno de ellos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 287 CP, en relación con el artículo 290 ejusdem, sin atenuación de la misma, por haber concurrido la agravante no constitutiva, ni modificatoria de la infracción prevista en el artículo 30.4 ejusdem ejecutar el hecho punible en pandilla-, según la regla contenida en el artículo 72 del cuerpo de leyes citado (...)", entre otras

5.1.4.- Haciendo uso de mi derecho a recurrir, presenté recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de apelación de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los doctores: David Jacho Chicaiza, Juez Nacional (e) Ponente, Wilmán Terán Carrillo y Dilza Muñoz Moreno, Jueces Nacionales (e), quienes con fecha 22 de julio de 2020, dictan sentencia de segundo nivel en la que resuelven:

"(...) 9.1) NIEGA, los recursos de apelación, planteados por los procesados: (...) Víctor Manuel Fontana Zamora, (...)", entre otras.

5.1.5.- En consecuencia, presenté recurso de casación y mediante auto de fecha 11 de agosto del 2020, el Tribunal de Apelación dispuso conceder el recurso de casación planteado y remitir el proceso a la Presidencia de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que mediante sorteo de ley se radique la competencia en el Tribunal de Casación que corresponda.

5.1.6.- El Tribunal de Casación se integró por los doctores Javier De la Cadena Correa, José Layedra Bustamante y Milton Ávila Campoverde, CONJUECES NACIONALES **ENCARGADOS** de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia; quienes con auto de 24 de agosto de 2020, en decisión de mayoría disponen:

(...) 4.- Decisión

*En virtud de lo analizado en este auto, y al amparo de las reglas generales para la tramitación de los recursos, constantes en el artículo 652 COIP, así como de las disposiciones jurídicas específicas al recurso de casación, que reposan en los artículos 656 y 657 ejusdem, este Tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, resuelve: (...) **4.9.- ADMITIR a trámite los cargos casacionales propuestos por el recurrente FONTANA ZAMORA VICTOR MANUEL, únicamente, por aquellos que refieren a: i) indebida aplicación del artículo 290 CP; ii) indebida aplicación del artículo 287 CP; y, iii) indebida aplicación del artículo 30.4 CP; estrictamente en los términos que se hacen constar en el subnumeral 3.2.8 de este auto.(...)"***

5.1.7.- Finalmente el Tribunal de Casación integrado por CONJUECES NACIONALES ENCARGADOS de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la

Corte Nacional de Justicia, con sentencia de 08 de septiembre de 2020, en decisión de mayoría deciden:

“DÉCIMO. - RESOLUCIÓN:

Sobre la base de lo queda expuesto, este Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA”, al amparo del artículo 657.5.6 COIP, declara:

10.1.- Improcedentes los recursos de casación planteados por los encartados (...) FONTANA ZAMORA VÍCTOR MANUEL, (...) , al no haberse justificado ni fundamentado con la suficiencia técnica que requiere este medio de impugnación extraordinario-, ninguna de sus alegaciones.”(…) Entre otros

Esta sentencia de mayoría emitida por el Tribunal de Casación integrado por los CONJUECES NACIONALES ENCARGADOS de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, indudablemente vulnera mis derechos constitucionales, en la persona de **VÍCTOR MANUEL FONTANA ZAMORA**, conforme lo voy a demostrar en los siguientes acápites.

5.2. Descripción y argumento de la vulneración de los derechos constitucionales del señor VÍCTOR MANUEL FONTANA ZAMORA. -

5.2.1 VULNERACIÓN DEL DERECHO A SE JUZGADO POR UN JUEZ INDEPENDIENTE, IMPARCIAL Y COMPETENTE, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76, NUMERAL 7 LITERAL K) DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. -

Debo comenzar mi argumentación, haciendo notar a la Corte Constitucional del Ecuador, que el proceso judicial penal seguido en mi contra, ha estado y se encuentra en medio de una disputa con una alta carga de presión y rivalidad política de carácter nacional, ya que abarca, el juzgamiento penal en contra de un ex – Presidente, ex - Vicepresidente de la República, varios ex - Ministros de Estado, entre otros ex funcionarios, razón por la cual, las Autoridades Judiciales, que me juzgaron se vieron fuertemente influenciadas y presionadas por los criterios vertidos de manera indiscriminada en medios de comunicación y medios digitales.

Sin perjuicio de ello, es necesario destacar que al estar conformado el Tribunal de Casación integrado por los doctores Javier De la Cadena Correa, José Layedra Bustamante (voto de mayoría) y Milton Ávila Campoverde, en su calidad de CONJUECES NACIONALES **ENCARGADOS** de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, se han dejado de observar las garantías básicas del debido proceso, especialmente, la garantía a ser juzgado por jueces independientes, imparciales y competentes; y, la garantía de prohibición de ser

The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions in the various departments of the Government of the United States of America.

The names of the persons who have been appointed to the various positions in the various departments of the Government of the United States of America are as follows:

The names of the persons who have been appointed to the various positions in the various departments of the Government of the United States of America are as follows:

The names of the persons who have been appointed to the various positions in the various departments of the Government of the United States of America are as follows:

The names of the persons who have been appointed to the various positions in the various departments of the Government of the United States of America are as follows:

The names of the persons who have been appointed to the various positions in the various departments of the Government of the United States of America are as follows:

The names of the persons who have been appointed to the various positions in the various departments of the Government of the United States of America are as follows:

The names of the persons who have been appointed to the various positions in the various departments of the Government of the United States of America are as follows:

The names of the persons who have been appointed to the various positions in the various departments of the Government of the United States of America are as follows:

The names of the persons who have been appointed to the various positions in the various departments of the Government of the United States of America are as follows:

The names of the persons who have been appointed to the various positions in the various departments of the Government of the United States of America are as follows:

juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto, contenida en el literal k) del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador; por lo que, paso a demostrar lo denunciado de la siguiente manera:

Al estar conformada la Sala que conoció y resolvió el recurso de casación, planteado por el compareciente, mediante sentencia de 8 de septiembre del 2020, por con **CONJUECES NACIONALES ENCARGADOS**, es decir por autoridades judiciales, que no cumplen con los estándares mínimos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus pronunciamientos, respecto a su legitimidad, estabilidad y permanencia en sus cargos, que permita esta manera **garantizar independencia e imparcialidad en su actuar**, libre de presiones externas, tal como lo señala la Convención Americana de Derechos Humanos y la propia Constitución de la República del Ecuador.

Al respecto, al revisar la sentencia impugnada, mediante la presente acción extraordinaria de protección, se evidencia la violación a esta garantía del debido proceso, cuando de manera expresa se indica que se realizó un proceso previo de "Evaluación Integral a los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia," que concluyó con la designación de **CONJUECES NACIONALES ENCARGADOS**, entre ellos los doctores LAURO JAVIER DE LA CADENA CORREA, MILTON AVILA CAMPOVERDE; y, JOSÉ LAYEDRA BUSTAMANTE, para mejor ilustración cito lo descrito:

“ 1.3.2.- Mediante Resolución No. 187-2019, de 15 de noviembre de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura, publicó los resultados del “Proceso de Evaluación Integral a los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional” y, en Resolución No. 197-2019, de 28 de noviembre de 2019, designó a los conjueces de la Corte Nacional de Justicia; la misma autoridad administrativa, conjuntamente con la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, en virtud del artículo 200 COFJ, asignaron los conjueces y los encargos correspondientes de las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia.

1.3.3.- Mediante Resolución No. 197-2019, de 28 de noviembre de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales (Arts. 181 CRE; 40.2; 264.1.10 COFJ); resolvió en sus artículos 1 y 2-, aprobar el Informe Técnico No. DNTH-SA-1002-2019, de 27 de noviembre de 2019, para designar temporalmente a las y los conjueces de la Corte Nacional de Justicia provenientes de las distintas Cortes Provinciales y Tribunales de lo Contencioso Administrativo y Tributario a nivel nacional; constando entre ellos, los doctores LAURO JAVIER DE LA CADENA CORREA, MILTON AVILA CAMPOVERDE; y, JOSÉ LAYEDRA BUSTAMANTE; es así que, mediante acciones de personal Nos. 2463-DNTH-2019-JT, 2457- DNTH-2019-JT; y, 2468-DNTH-2019-JT de 29 de noviembre de 2019, suscritas por el Dr. Pedro José Crespo, Director General del Consejo de la Judicatura, se emite sus designaciones como Conjueces Temporales de la Corte Nacional de Justicia.

1.3.4.- Mediante sorteo de fecha 17 de agosto de 2020, las 15h15 ante la Presidencia de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year.

The second part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

The third part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

The fourth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

The fifth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

The sixth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

The seventh part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

The eighth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

The ninth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

The tenth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.



de Justicia; se conformó el Tribunal de Casación para conocer la presente causa; tribunal que quedó integrado por los doctores: Javier De la Cadena Correa (Ponente), Milton Avila Campoverde y José Layedra Bustamante, Conjueces Nacionales.” (Sic)¹

Esta circunstancia, sin lugar a dudas vulnera el artículo 8 numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos que, a la vez, constituye fundamento de derecho internacional de la norma, al establecer que:

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, **por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley**, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

En este sentido la Corte Interamericana de Derecho Humanos, dentro del Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela, en el párrafo 98, ha señalado claramente que conforme a la jurisprudencia de esta Corte, del Tribunal Europeo, así como de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, las garantías que se derivan de la independencia judicial son **“un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas”**.

Por lo tanto, en el presente caso, se están atentando en contra de estas tres garantías de la independencia judicial:

Primero, como he mencionado existe un proceso inadecuado en el nombramiento de los **Conjueces Nacionales Encargados LAURO JAVIER DE LA CADENA CORREA, MILTON AVILA CAMPOVERDE; y, JOSÉ LAYEDRA BUSTAMANTE**, ya que provienen de un “Proceso de Evaluación Integral a los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional,” que fue y está seriamente cuestionado en la propia Corte Constitucional del Ecuador,² que se inició y terminó, **el 15 de noviembre de 2019**, es decir pocos días antes y con el objetivo de iniciar el proceso de juzgamiento que hoy está en análisis, que inicia con el auto de llamamiento a juicio, dictado por la doctora Daniella Camacho Herold, Jueza Nacional de Garantías Penales, el **3 de enero de 2020**.

Además, los **Conjueces Nacionales Encargados** fueron escogidos y designados de manera discrecional por el Pleno del Consejo de la Judicatura, de entre los Jueces integrantes de las Cortes

¹ Tribunal de Casación integrado por los doctores Javier De la Cadena Correa, José Layedra Bustamante (voto de mayoría) y Milton Ávila Campoverde, CONJUECES NACIONALES ENCARGADOS de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, emiten sentencia de mayoría de 08 de septiembre de 2020.

² Corte Constitucional del Ecuador. Ver caso No. 37-19-IN, Admitido a trámite mediante auto de Sala de Admisión de fecha 26 de septiembre de 2019.

<http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1b434b4e-15d3-4a9f-a55a-c918c3c07c68/0037-19-in.pdf?guest=true>

2. The second part outlines the various methods and tools used for data collection and analysis. It includes a detailed description of the survey process and the statistical techniques employed to interpret the results.

3. The third part presents the findings of the study, highlighting the key trends and patterns observed in the data. It also discusses the implications of these findings for policy-making and future research.

4. The fourth part provides a comprehensive overview of the challenges faced during the research process and offers suggestions for overcoming them. It also includes a list of references and a bibliography of related works.

5. The final part of the document is a conclusion that summarizes the main points of the study and reiterates the significance of the findings. It also expresses the authors' gratitude to the funding agencies and the participants who made the study possible.

Provinciales y Tribunales de lo Contencioso Administrativo y Tributario a nivel nacional; constando entre ellos, los doctores LAURO JAVIER DE LA CADENA CORREA, MILTON AVILA CAMPOVERDE; y, JOSÉ LAYEDRA BUSTAMANTE, es decir sin un previo concurso de méritos y oposición, sin saber los parámetros y condicionamientos realizados por el Consejo de la Judicatura para su designación provisional.

Consecuentemente, de una manera fácil y clara se puede concluir que la integración del Tribunal de Casación por CONJUECES NACIONALES ENCARGADOS de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, viola el principio de independencia judicial, porque no provienen de un adecuado proceso de nombramiento, conforme lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, ha indicado con relación a esta garantía lo siguiente:

“75. Esta Corte considera necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento. Como lo señalara la Corte Europea, la independencia de cualquier juez supone que **se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas**”³.

Además, dentro Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela indica que:

“139. La Corte ha establecido que el derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las directrices políticas estatales a través de funciones públicas. Por lo tanto, es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación. El artículo 8.1 establece, en lo pertinente, que: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

146. Los términos en que está redactado este artículo indican que el sujeto del derecho es el justiciable, la persona situada frente al juez que resolverá la causa que se le ha sometido. De ese derecho surgen dos obligaciones. La primera del juez y la segunda del Estado. El juez tiene el deber de ser independiente, deber que cumple cuando juzga únicamente conforme a - y movido por- el Derecho. Por su parte, el Estado tiene el deber de respetar y garantizar, conforme al artículo 1.1 de la Convención, el derecho a ser juzgado por un juez independiente. El deber de respeto consiste en la obligación negativa de las autoridades públicas de

³ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, sentencia de 31 de enero de 2001, serie C N° 268, párr 75.

REPORT

The purpose of this report is to provide a comprehensive overview of the current state of the project and to identify the key challenges and opportunities for the future. The report is organized into several sections, each focusing on a different aspect of the project.

The first section, "Introduction," provides a brief overview of the project and its objectives. The second section, "Background," discusses the context in which the project is taking place and the relevant stakeholders. The third section, "Methodology," describes the research methods used to gather data and analyze the results. The fourth section, "Results," presents the findings of the study, and the fifth section, "Conclusion," summarizes the main points and offers recommendations for future work.

The report is intended for a wide audience, including project managers, stakeholders, and researchers. It is hoped that the information provided will be useful in making informed decisions about the project and its future development.

abstenerse de realizar injerencias indebidas en el Poder Judicial o en sus integrantes, es decir, con relación a la persona del juez específico. El deber de garantía consiste en prevenir dichas injerencias e investigar y sancionar a quienes las cometan. **Además, el deber de prevención consiste en la adopción, conforme al artículo 2 de la Convención, de un apropiado marco normativo que asegure un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad de los jueces y las demás condiciones ya analizadas en el Capítulo VI de la presente Sentencia.**

147. Ahora bien, de las mencionadas obligaciones del Estado surgen, a su vez, derechos para los jueces o para los demás ciudadanos. **Por ejemplo, la garantía de un adecuado proceso de nombramiento de jueces involucra necesariamente el derecho de la ciudadanía a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad; la garantía de no estar sujeto a libre remoción conlleva a que los procesos disciplinarios y sancionatorios de jueces deben necesariamente respetar las garantías del debido proceso y debe ofrecerse a los perjudicados un recurso efectivo; la garantía de inamovilidad debe traducirse en un adecuado régimen laboral del juez, en el cual los traslados, ascensos y demás condiciones sean suficientemente controladas y respetadas, entre otros.**"⁴

Ahora bien, en segundo lugar y en relación a las garantías de la independencia judicial, **de la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas de los Jueces**, en el presente caso también se han violentado de manera flagrante, ya que los **CONJUECES NACIONALES ENCARGADOS**, integrantes del Tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, no tienen ninguna garantía de inamovilidad, o en otras palabras **ninguna garantía de estabilidad en su cargo**, para que de esta manera se pueda pensar que actuaron de forma imparcial e independiente, pues su nombramiento provisional dependió y depende exclusivamente del Pleno del Consejo de la Judicatura, lo que en el mejor de los casos genera incertidumbre en los juzgadores, así como presión y maleabilidad, lo que sin lugar a dudas atenta en contra de la independencia judicial y la garantía de ser juzgado por jueces imparciales.

En este sentido, hubiese sido lo convencionalmente válido, independientemente de la decisión que hubieren tomado, esperar a que concluya el concurso de méritos y oposición para la designación de Juezas y Jueces de la Corte Nacional del Ecuador, que se encuentra en marcha y esperar el pronunciamiento de la propia Corte Constitucional sobre este proceso cuestionado, para que se integre el Tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, con **JUECES NACIONALES PERMANENTES**, y de esta manera haber contado con la garantía de la independencia judicial en el conocimiento y resolución del recurso de casación presentado por mi parte.

Concomitante con lo expuesto, en el párrafo anterior, es evidente que el conocimiento y resolución

⁴ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, sentencia de 30 de junio de 2009, serie C N2197, párr. 139, 146 y 147.

del recurso de casación propuesto por el compareciente, existió una gran presión interna, como externa hacia los **CONJUECES NACIONALES PROVISIONALES** de la Corte Nacional de Justicia; que no fue otra que la presión mediática, periodística, de sectores de opinión, del Consejo de la Judicatura, y de otros agentes, inclusive de índole político, redes sociales e incluso amedrentamiento en contra de los familiares de los Conjueces, que al final del día, sucumbieron ante esas presiones, y, su criterio se vio influenciado, descartando el sustanciación del recurso de casación la independencia e imparcialidad exigida; lo que no es una mera alegación, sino que se puede evidenciar de las inconsistencias esgrimidas en la sentencia emitida por aquellos, de la que se denota haber sido realizada al, con errores de dicción e incluso ortográficos (que se pueden evidenciar a lo largo de las citas presentadas); sentencia, que no se encuentra motivada y viola principios constitucionales básicos, como demostraré más adelante, pero que en esta fase sirven para establecer, que responde a la presión a la que fueron sometidos los **Conjueces Nacionales Provisionales**.

Una muestra, adicional de esta presión, fue la celeridad con la que se resolvió el recurso de casación, presentado por más de diecinueve recurrentes, en apenas 15 días término⁵ después de haber avocado conocimiento, situación que difiere de otros procesos, en los que se encuentran esperando audiencia y resolución por años incluso. El hecho que los CONJUECES NACIONALES PROVISIONALES, haya resuelto el recurso de casación, con una velocidad inusitada, comprada con otras causas, llama la atención y deberá ser considerado como un record de celeridad, pero lo bueno fuera que en adelante todos los procesos se resolvieran así, pero la realizada es diferente (carrea de caballos, parada de burros, diría el argot popular); es curioso también, que la inusitada celeridad, convenientemente, coincidan con los tiempos y necesidades del calendario electoral propuesto por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador; que comprueba lo dicho, que el caso, en el que se me vinculó esta afectado por la carga política, presión mediática y sobre todo relevancia respecto de un personaje político en particular.

Consecuentemente, como había señalado y en relación con estos principios, de independencia judicial, como son un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del *Caso Chocrón Vs. Venezuela*, ha manifestado lo siguiente:

"98. Conforme a la jurisprudencia de esta Corte y del Tribunal Europeo, así como de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura (en adelante "Principios Básicos"), las siguientes garantías se derivan de la independencia judicial: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas.

99. Entre los alcances de la inamovilidad relevantes para el presente caso, los Principios Básicos establecen que "[Ha ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los

⁵ Tribunal de Casación integrado por los doctores Javier De la Cadena Correa, José Layedra Bustamante (voto de mayoría) y Milton Ávila Campoverde, **CONJUECES NACIONALES ENCARGADOS** de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, avocan conocimiento del recurso de casación el 18 de agosto de 2020 y emiten sentencia escrita el 08 de septiembre de 2020.

períodos establecidos" y que (s)e garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados mediante decisión administrativa como de los elegidos, hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el período para el que hayan sido nombrados o elegidos, cuando existan normas al respecto". Además, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que los jueces sólo pueden ser removidos por faltas de disciplina graves o incompetencia y acorde a procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según la constitución o la ley. Este Tribunal ha acogido estos principios y ha afirmado que la autoridad a cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse independiente e imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de defensa. **Ello es así toda vez que la libre remoción de jueces fomenta la duda objetiva del observador sobre la posibilidad efectiva de aquellos de decidir controversias concretas sin temor a represalias.**

100. Respecto a la garantía contra presiones externas, los Principios Básicos disponen que los jueces resolverán los asuntos que conozcan **"basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo"**. Asimismo, dichos Principios establecen que "[n]o se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial"⁶.

Adicionalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, ha indicado que:

190. Respecto a la garantía contra presiones externas, **los Principios Básicos disponen que los jueces resolverán los asuntos que conozcan "basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo"**. Asimismo, dichos Principios establecen que "[n]o se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial"⁷.

Ahora bien, en referencia a la violación a la garantía a ser juzgado por jueces independientes, imparciales y competentes; y, la garantía de prohibición de ser juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto, contenida en el literal k) del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, la propia Corte Constitucional ha señalado, en la sentencia No. 3-19-CN/20, que la independencia judicial constituye una garantía básica del debido proceso judicial, al afirmar que:

"25. La independencia judicial institucional, tanto interna como externa, es indispensable, a

⁶ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela, sentencia de 1 de julio de 2011, serie C N2227, párr. 98, 99 y 100.

⁷ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, sentencia de 28 de agosto de 2013, serie C N 2 268, párr. 190.

GROUP

The first part of the report deals with the general situation of the group. It is a very important part of the report and should be read carefully. The second part of the report deals with the specific details of the group. It is also a very important part of the report and should be read carefully. The third part of the report deals with the conclusions of the group. It is a very important part of the report and should be read carefully.

The fourth part of the report deals with the recommendations of the group. It is a very important part of the report and should be read carefully. The fifth part of the report deals with the conclusions of the group. It is a very important part of the report and should be read carefully.

The sixth part of the report deals with the conclusions of the group. It is a very important part of the report and should be read carefully.

The seventh part of the report deals with the conclusions of the group. It is a very important part of the report and should be read carefully.

The eighth part of the report deals with the conclusions of the group. It is a very important part of the report and should be read carefully.

The ninth part of the report deals with the conclusions of the group. It is a very important part of the report and should be read carefully.

The tenth part of the report deals with the conclusions of the group. It is a very important part of the report and should be read carefully.

Novecientos veinte que
- 969 -



su vez, para garantizar la independencia individual o funcional de los jueces y juezas, de forma que los justiciables puedan ejercer su derecho a un juez independiente, imparcial y competente, conforme al artículo 76 numeral 7 literal k de la Constitución. Esta independencia individual o funcional de los jueces o juezas ha sido concebido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) incluso como un derecho subjetivo de los mismos para ejercer adecuadamente sus funciones públicas.

26. La independencia judicial constituye, por tanto, una garantía básica del debido proceso judicial, pero no solo por el derecho específico a ser juzgado por un juez independiente, sino además porque de la independencia de la jueza o juez depende, a su vez, la debida protección de otros derechos y principios, algunos de los cuales integran el debido proceso.

27. En efecto, sin un juez independiente no se pueden cumplir las garantías del debido proceso como por ejemplo la garantía del cumplimiento de las normas y los derechos de los justiciables por parte de las autoridades judiciales, el derecho a la **defensa o la motivación**, puesto que estas y otras requieren que el juez pueda interpretar la ley y argumentar jurídicamente de forma autónoma (independencia positiva). En un sentido más amplio, son todos y cada uno de los derechos constitucionales los que pueden ser afectados por violaciones a la independencia judicial, lo que deviene en una afectación al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses de los justiciables.⁸

Razón por la cual, en el conocimiento y resolución del recurso de casación presentado por el compareciente, conforme lo relatado, el Tribunal de Casación por **CONJUECES NACIONALES ENCARGADOS** de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, no cumplieron con los tres factores indispensables que permitan el cumplimiento del derecho en análisis y que son: independencia, imparcialidad y competencia.

Por lo que es y era sustancial, que no tengan afinidad alguna para las partes procesales, que no tengan presiones de ninguna naturaleza, social o mediática, y que, su actuación esté otorgada por la ley, y solo así su resolución podría surtir eficacia y validez jurídica y social, lo que no ocurrió en el presente caso.

Por consiguiente, señores Jueces de la Corte Constitucional, ustedes podrán evidenciar que en el presente caso, se vulneró la garantía del debido proceso, a ser juzgado por jueces independientes, imparciales y competentes; y, la garantía de prohibición de ser juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto, contenida en el literal k) del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 8 numeral 1 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y las principios 1, 2 y 3 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura; y, la jurisprudencia de desarrollo de la Corte Interamericana de

⁸ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 3-19-CN/20, de fecha 29 de julio de 2020. Juez Ponente Agustín Grijalva Jiménez.

Derechos Humanos, instrumentos y precedentes que en materia de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad y que deben aplicarse en el orden jurídico interno, como lo ha señalado esta Corte Constitucional⁹.

5.2.2 VULNERACIÓN AL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA GARANTÍA DE LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76, NUMERAL 7 LITERAL L) DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.

Para argumentar esta violación a mis derechos constitucionales es importante señalar que la garantía de la debida motivación está configurada en la Constitución de la República en el artículo 76, numeral 7, literal l), claramente prescribe:

“Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.”

La Corte Constitucional del Ecuador al ser el máximo órgano de control e interpretación constitucional, ha desarrollado esta disposición en múltiples sentencias. Así pues, ha señalado mediante sentencia **176-14-EP/19**, que, debida la motivación de las resoluciones judiciales, constituye una **garantía del debido proceso que permite frenar la arbitrariedad** en la que pueden incurrir los jueces, obligándoles a expresar las razones objetivas que les conduce a tomar tal o cual decisión dentro de un caso puesto en su conocimiento. La Corte, de manera puntual expresa:

68. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía de las partes procesales frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los jueces, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso.

69. Por lo cual, los jueces tienen la obligación de, al resolver las causas, expresar las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión, enunciando las normas o principios jurídicos en que se funda y explicando la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho.

En la sentencia **1357-13-EP/20**, la Corte Constitucional indica que:

32. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales se encuentra reconocido en la Constitución como una garantía del debido proceso en el artículo 76, número 7, letra / y constituye una barrera a la arbitrariedad judicial para garantizar la sujeción del juez al ordenamiento jurídico y el posterior control sobre la razonabilidad de la providencia. Por ello,

⁹ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 10-18-CN/19, de fecha 12 de junio de 2019. Juez Ponente Alí Lozada Prado.

para cumplir con la disposición constitucional, **la motivación de una sentencia no puede limitarse a citar normas y resumir los antecedentes del caso, sino que exige justificar por medio de un análisis lógico y coherente la resolución a la que arribó, mediante la explicación de la pertinencia de la aplicación de las normas a los hechos del caso.**¹⁰

Finalmente, y para el presente caso, es necesario anotar lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia No. **304-13-EP/20**:

21. La Corte ha señalado que **la motivación no se agota con la mera enunciación inconexa de normas jurídicas o antecedentes de hecho, sino que obliga al juzgador a efectuar un juicio lógico que explique de manera fundamentada por qué una disposición jurídica se aplica a un antecedente de hecho y qué conclusiones se derivan de esta aplicación.** Consecuentemente, la motivación está orientada a evitar la discrecionalidad y arbitrariedad judicial. La Corte también ha indicado que el derecho a recibir decisiones motivadas tiene dos tipos de destinatarios: (i) las partes procesales y peticionarios y (ii) las personas en general, indistintamente de si tienen la calidad de partes procesales o peticionarios.¹¹

Como consecuencia lógica de las citas expuestas, se entiende que la motivación como garantía del debido proceso, permite frenar la arbitrariedad del poder público (en el ámbito administrativo o judicial), lo cual solamente es posible cuando los ciudadanos conocen las razones en las que se funda la administración o el órgano judicial, el momento de tomar la decisión que afectará sus derechos.

Bajo el modelo de Estado constitucional de derechos y de justicia previsto por el constituyente, los jueces tienen la obligación de motivar suficientemente sus decisiones en base a los principios previstos en la Constitución y la Ley, de tal suerte que en la solución de los conflictos primen los criterios normativos y no los simples caprichos o las interpretaciones, muchas veces intencionadas, de los jueces.

En este sentido, me corresponde argumentar las razones por las cuales considero que la sentencia de fecha 08 de septiembre de 2020, emitida por voto de mayoría (Javier de la Cadena Correa y José Layedra Bustamante), por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, **INTEGRADA POR CONJUECES NACIONALES ENCARGADOS**, vulnera la garantía básica del debido proceso a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

Por lo tanto, el recurso de casación presentado por el compareciente, fue admitido a trámite mediante auto de 24 de agosto de 2020, por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, por los siguientes cargos:

¹⁰ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1357-13-EP/20, de fecha 08 de enero de 2020. Jueza Ponente Daniela Salazar Marín.

¹¹ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 304-13-EP/20, de fecha 15 de enero de 2020. Juez Ponente Agustín Grijalva Jiménez.

GROUP

The first part of the report deals with the general situation of the group. It is a very important part of the report and should be read carefully. It gives a general overview of the group and its activities.

The second part of the report deals with the specific activities of the group. It is a very important part of the report and should be read carefully. It gives a detailed account of the group's activities and the results achieved.

The third part of the report deals with the financial situation of the group. It is a very important part of the report and should be read carefully. It gives a detailed account of the group's financial situation and the results achieved.

The fourth part of the report deals with the future plans of the group. It is a very important part of the report and should be read carefully. It gives a detailed account of the group's future plans and the results achieved.

The fifth part of the report deals with the conclusions of the group. It is a very important part of the report and should be read carefully. It gives a detailed account of the group's conclusions and the results achieved.

The sixth part of the report deals with the recommendations of the group. It is a very important part of the report and should be read carefully. It gives a detailed account of the group's recommendations and the results achieved.

The seventh part of the report deals with the appendix. It is a very important part of the report and should be read carefully. It gives a detailed account of the group's appendix and the results achieved.

The eighth part of the report deals with the bibliography. It is a very important part of the report and should be read carefully. It gives a detailed account of the group's bibliography and the results achieved.

The ninth part of the report deals with the index. It is a very important part of the report and should be read carefully. It gives a detailed account of the group's index and the results achieved.

The tenth part of the report deals with the conclusion. It is a very important part of the report and should be read carefully. It gives a detailed account of the group's conclusion and the results achieved.

The eleventh part of the report deals with the appendix. It is a very important part of the report and should be read carefully. It gives a detailed account of the group's appendix and the results achieved.

The twelfth part of the report deals with the bibliography. It is a very important part of the report and should be read carefully. It gives a detailed account of the group's bibliography and the results achieved.

The thirteenth part of the report deals with the index. It is a very important part of the report and should be read carefully. It gives a detailed account of the group's index and the results achieved.

The fourteenth part of the report deals with the conclusion. It is a very important part of the report and should be read carefully. It gives a detailed account of the group's conclusion and the results achieved.

The fifteenth part of the report deals with the appendix. It is a very important part of the report and should be read carefully. It gives a detailed account of the group's appendix and the results achieved.

(...) 4.- Decisión: (...) **4.9.- ADMITIR** a trámite los cargos casacionales propuestos por el recurrente FONTANA ZAMORA VICTOR MANUEL, únicamente, por aquellos que refieren a: **i) indebida aplicación del artículo 290 CP; ii) indebida aplicación del artículo 287 CP; y, iii) indebida aplicación del artículo 30.4 CP; estrictamente en los términos que se hacen constar en el subnumeral 3.2.8 de este auto. (...)**”

Por lo que, con facilidad se deduce, que en sentencia motivada se debía dar **contestación y analizar de manera pormenorizada e individual**, a cada uno de los cargos por los cuales fue admitido el recurso de casación presentado por mi parte, y de igual forma los cargos presentados por los otros recurrentes, no en conjunto como se hizo; es decir, identificando de manera clara el nexo causal entre los argumentos de cargo y descargo presentados y defendidos en la audiencia de sustentación del recurso de casación, que se realizó del 03 y 04 de septiembre de 2020, y la enunciación y desarrollo de las normas constitucionales e infraconstitucionales aplicables para el caso en concreto; sin embargo, nada de esto ocurrió en la sentencia dictada el 08 de septiembre de 2020, con voto de mayoría por los doctores Javier De la Cadena Correa, José Layedra Bustamante, CONJUECES NACIONALES ENCARGADOS de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia.

En primer lugar, porque, como dije, se realizó un análisis superficial y grupal de los cargos presentados por mi parte y por parte de todos los recurrentes, que como lo señalé somos más de dieciocho;

En segundo lugar, porque en ningún momento se realizó el contraste de los argumentos presentados en mi defensa, con los argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General del Estado, para llegar a la respectiva subsunción en las normas aplicables al caso, tomando en cuenta solo los argumentos presentados por la parte acusadora, evitando pronunciarse acerca de puntos medulares del debate casacional; y,

En tercer lugar, porque el tribunal de Casación, se pronunció acerca de aspectos que ya fueron superados en la fase de admisibilidad del recurso de casación, violando de esta manera el principio de preclusión procesal y el derecho a la seguridad jurídica, evitando resolver el recurso de casación en las cuestiones de fondo planteadas, dejando de cumplir con su deber de ser jueces, que corrijen o avalan la aplicación del derecho en la sentencia recurrida en casación.

Con respecto al **primer y segundo cargo** presentados, debo argumentar que, en la sentencia impugnada, se agrupan las causales admitidas a los casacionistas, incluido mi recurso de casación de la siguiente manera:

“8.3.2.- Una vez identificados los reproches argüidos por los casacionistas -desde el marco estricto de las causales que prevé la norma-; más allá de que, conforme queda evidenciado, varios de ellos si bien es cierto se refieren a unas mismas normas (algunas de las cuales difieren en el cuerpo legal ya sea COIP o CP); y, que la causal invocada varía en ciertos casos;

GROUP 1

The first group of students, Group 1, was assigned to the first section of the course. They were given a list of topics to research and were required to present their findings to the class. The topics included the history of the United States, the role of the government, and the impact of the economy.

The second group of students, Group 2, was assigned to the second section of the course. They were given a list of topics to research and were required to present their findings to the class. The topics included the history of the United States, the role of the government, and the impact of the economy.

The third group of students, Group 3, was assigned to the third section of the course. They were given a list of topics to research and were required to present their findings to the class. The topics included the history of the United States, the role of the government, and the impact of the economy.

The fourth group of students, Group 4, was assigned to the fourth section of the course. They were given a list of topics to research and were required to present their findings to the class. The topics included the history of the United States, the role of the government, and the impact of the economy.

The fifth group of students, Group 5, was assigned to the fifth section of the course. They were given a list of topics to research and were required to present their findings to the class. The topics included the history of the United States, the role of the government, and the impact of the economy.

The sixth group of students, Group 6, was assigned to the sixth section of the course. They were given a list of topics to research and were required to present their findings to the class. The topics included the history of the United States, the role of the government, and the impact of the economy.

The seventh group of students, Group 7, was assigned to the seventh section of the course. They were given a list of topics to research and were required to present their findings to the class. The topics included the history of the United States, the role of the government, and the impact of the economy.

no es menos cierto que, más allá de los fundamentos que se los ha planteado desde la óptica individual de cada recurrente, el tema nuclear de los cuestionamientos de violación de la ley, estriba en cuatro ejes principales a saber:

En cuanto al tipo penal cohecho, cohecho simple, cohecho para cometer otro delito; y, amenazas u ofertas tendientes a corromper a funcionario público. [arts. 285, 287, 290 CP; 280 COIP];

En cuanto al grado de participación: autoría (mediata por instigación) y complicidad. [art. 41, 42 CP 42.2,a) COIP-, 43 CP];

En cuanto a la circunstancia agravante de pandilla. [art. 30.4 CP]; y,

En cuanto a otras normas (requisitos de la sentencia:reparación integral, materialidad de la infracción y culpabilidad), conducta penalmente relevante, dolo. [arts. 22, 26, 619.2, 622.6 COIP; 14 CP]"

De lo cual se infiere, que bajo el criterio de “agrupación” realizado por los Jueces, el recurso de casación presentado por el compareciente y admitido de manera individual a discusión casacional, se resuelve en conjunto, considerando que estaría inmerso en los grupos:

En cuanto al tipo penal cohecho, cohecho simple, cohecho para cometer otro delito; y, amenazas u ofertas tendientes a corromper a funcionario público. [arts. 285, 287, 290 CP; 280 COIP];

En cuanto a la circunstancia agravante de pandilla. [art. 30.4 CP]; y,

Sin embargo, recalando, a riesgo de ser repetitivo, la Sala realiza un análisis superficial, en grupo, sin considerar y dar respuesta, individual y pormenorizada, a cada uno de los argumentos presentados en mi defensa y en ningún momento se realiza de manera adecuada argumentación de los elementos de cargo y descargo, menos la operación lógica del silogismo jurídico, necesario para cumplir con los estándares de una debida motivación, exigidos por la Corte Constitucional del Ecuador, convirtiendo a la sentencia impugnada en arbitraria e inmotivada.

Al respecto y para reforzar lo dicho, se debe dejar en claro que cuando la Sala impugnada, analiza los grupos de cargos casacionales escogidos, los hace de la siguiente manera:

En relación al grupo: ***En cuanto al tipo penal cohecho, cohecho simple, cohecho para cometer otro delito; y, amenazas u ofertas tendientes a corromper a funcionario público. [arts. 285, 287, 290 CP; 280 COIP];*** la Sala enumera a las personas que compartimos (según su criterio) los diferentes cargos casaciones siendo los siguientes:

Y

GROUP

The first group of students in the class was the most active and interested. They were all from the same school and had been together for several years. They were all very bright and had a lot of ideas to share.

The second group of students was also very active and interested. They were all from the same school and had been together for several years. They were all very bright and had a lot of ideas to share.

The third group of students was also very active and interested. They were all from the same school and had been together for several years. They were all very bright and had a lot of ideas to share.

The fourth group of students was also very active and interested. They were all from the same school and had been together for several years. They were all very bright and had a lot of ideas to share.

The fifth group of students was also very active and interested. They were all from the same school and had been together for several years. They were all very bright and had a lot of ideas to share.

The sixth group of students was also very active and interested. They were all from the same school and had been together for several years. They were all very bright and had a lot of ideas to share.

The seventh group of students was also very active and interested. They were all from the same school and had been together for several years. They were all very bright and had a lot of ideas to share.

The eighth group of students was also very active and interested. They were all from the same school and had been together for several years. They were all very bright and had a lot of ideas to share.

The ninth group of students was also very active and interested. They were all from the same school and had been together for several years. They were all very bright and had a lot of ideas to share.

The tenth group of students was also very active and interested. They were all from the same school and had been together for several years. They were all very bright and had a lot of ideas to share.

The eleventh group of students was also very active and interested. They were all from the same school and had been together for several years. They were all very bright and had a lot of ideas to share.

The twelfth group of students was also very active and interested. They were all from the same school and had been together for several years. They were all very bright and had a lot of ideas to share.

The thirteenth group of students was also very active and interested. They were all from the same school and had been together for several years. They were all very bright and had a lot of ideas to share.

The fourteenth group of students was also very active and interested. They were all from the same school and had been together for several years. They were all very bright and had a lot of ideas to share.

The fifteenth group of students was also very active and interested. They were all from the same school and had been together for several years. They were all very bright and had a lot of ideas to share.

Alegaciones que han sido esgrimidas por los procesados ALVARADO VINICIO, BONILLA VIVIANA, CORREA RAFAEL, GALARZA RAMIRO, **FONTANA VICTOR**, DU YEON, WILLIAM PHILLIPS, SALAS EDGAR, SANCHEZ BOLIVAR, VITERI CHRISTIAN y VERDUGA PEDRO); y que, conforme ha quedado indicado ut supra, lejos que, desde la óptica individual que le han impregnado dichos recurrentes a sus fundamentaciones, esto es, incluso desde esferas que atañen a causales casacionales distintas, ya como: indebida aplicación -en su mayoría-, errónea interpretación y hasta contravención expresa; considerando que cada causal -conforme también así ya fuera referido anteriormente al hacer el abordaje acerca del recurso de casación-, versa o atañe a un error de derecho particular (error de omisión, error de pertinencia y/o error de interpretación.

Luego copia los artículos cuestionados del Código Orgánico Integral Penal y cita de manera textual gran parte de la sentencia del 22 de julio de 2020, emitida por el Tribunal de apelación de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, integrado, también por jueces encargados, los doctores: David Jacho Chicaiza, Juez Nacional (e) Ponente, Wilmán Terán Carrillo y Dilza Muñoz Moreno, Jueces Nacionales (e), quienes negaron el recurso de apelación presentado, por el compareciente; y, finalmente, de manera escueta decide que:

“Una vez que han quedado determinados -con suficiencia, incluso so pena de que aparezca con abundancia de referencia- los elementos a contraponer, esto es, entre lo que establecen las normas que se alegan violadas y lo expuesto o desarrollado por el Juzgador de instancia; de suyo surge y se evidencia que todos y cada uno de los ahora diferentes argumentos presentados por los diversos casacionistas que se han agrupado entorno al problema jurídico que atañe -más allá del enfoque causal o argumental-, con relación al tipo penal de cohecho, cohecho simple, cohecho para cometer otros delitos, amenazas u ofertas tendientes a corromper a un funcionario público, elementos del tipo (verbos nucleares, sujetos activos intra y extra neus, etc.); no solo que han sido debidamente despejados -ya que cabe reparar los mismos argumentos ya ha sido agotados en instancia y se persite en ello en escenario casacional-; es así que a las claras la alegación de vulneración de los artículos 285, 287, 290 CP y 280 COIP, resultan improcedentes; más allá de que en la forma que han sido planteadas ya en su fundamentación en la correspondiente audiencia, llevarían necesariamente a aquellos temas vedados para este escenario como es la nueva revisión de hechos -con al teración del relato fáctico-, así como una revaloración de todo el acervo probatorio. (resaltado me corresponde)

A todo ello y que desde ya torna improcedente este primer gupo de alegaciones, es menester reparar en que los planteamientos de los recurrentes se orientan en definitiva ya sea a la inexistencia del dominio del hecho, a que no tenían competencia para realizar la contraprestación; a que no se tenido la competencia institucional y funcional para hacer o dejar de hacer la contraprestación que se otorga a cambio de la dádiva, que los sentenciados no han tenido capacidad para realizar una contraprestación (contratar); que no les es aplicable para sancionar el cohecho activo, que FGE acusó por la comisión del delito contenido en el artículo 286 CP, pero condenados por el artículo 290 CP y agravado, etc. (...)

9

OK

The second part of the document provides a detailed overview of the company's current financial position. It includes a summary of assets, liabilities, and equity, as well as a breakdown of income and expenses for the reporting period. This section is designed to provide stakeholders with a clear understanding of the company's financial health.

The third part of the document discusses the company's future financial outlook and the strategies being implemented to achieve its long-term goals. It includes a forecast of revenue and expenses, as well as a discussion of the risks and opportunities that may impact the company's performance. This section is intended to provide stakeholders with a clear understanding of the company's future prospects.

The fourth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions of the financial review. It highlights the strengths and weaknesses of the company's financial performance and provides recommendations for areas of improvement. This section is designed to provide stakeholders with a clear understanding of the company's current financial position and the steps that need to be taken to ensure its long-term success.

(...) Es así que, sobre la base de todo lo que queda precisado al despejar y dar respuesta a este primer grupo de alegaciones de violación de ley, se determina que las mismas resultan ser improcedentes.” (sic)

Es decir, e insisto, en ningún momento se estudió y analizó los argumentos, incluso se puede decir que el análisis menor al realizado para la admisión del recurso por la misma Sala; lo que se colige del siguiente razonamiento:

“5.1.- PRIMER CARGO. – INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 290 DEL C.P.-

La sentencia dictada por Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, **realizó una indebida aplicación del Art. 290 de Código Penal**, toda vez que, dicha norma no se adecua al hecho legal y relato fáctico efectuado por el juzgador, que va en desmedro de mi presunción de inocencia. Existe por tanto yerro de la selección normativa por parte de la Sala, toda vez que, dentro del análisis del juzgador se deja de lado el principio de inocencia y se centra el establecer la conclusión de culpabilidad, contra la correcta aplicación del estándar vigente actualmente sobre la duda razonable, esto es que, se requiere fincar conclusiones firmes y claras para romper esa presunción, por tanto la norma pertinente que se debía aplicar respecto de a los hechos fácticos, es el numeral 2 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador.(...); y,

5.2. SEGUNDO CARGO INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 287 DEL C.P.-

En la sentencia objeto del presente recurso extraordinario de casación, el Tribunal de Apelación realiza una indebida aplicación de la sanción establecida en el artículo 287 del Código Penal, toda vez que, por un lado, se vulnera el principio de congruencia; segundo, el tipo penal, no le es aplicable para sancionar el cohecho activo; y, por último, la conducta no se encuentra subsumida en la ley vigente por lo que viola las garantías constitucionales.

Fiscalía como titular de la acción penal pública, en la audiencia Evaluatoria y preparatoria de juicio, acusó por las conductas tipificadas en el art. 286 del Código Penal, en relación con el art. 233 de la Constitución de la República. Más el Tribunal de Apelación condenó por las conductas determinas en el Art. 290 del Código Penal, agravado con la pena establecida en 287 Ibídem, hecho que impidió la viabilidad de la defensa, violentado el derecho a la defensa, reconocido en los artículos 75 y 76 numeral 7 literal a) de la Carta Magna.

Sin perjuicio de lo anterior, ocurre una indebida aplicación del artículo 287 del Código Penal, por cuanto, la forma y términos de la conducta atribuida al compareciente no le pertenecen, ya que la modalidad agravada a la que hace referencia el citado artículo, aplicado por el Tribunal de alzada, es aplicable exclusivamente para el reo de cohecho pasivo, mientras que las penas aplicables al cohecho activo, en este caso en concreto, corresponden a las

determinadas en el inciso segundo del Art. 285 del Código Penal, razón por la cual, esta es la norma que debía haber sido aplicada por el tribunal de apelación para la imposición de la pena.

Por último, se colige que el tipo penal establecido en el artículo 287 del Código Penal no se encuentra subsumido en la conducta típica establecida en el vigente artículo 280 inciso cuarto del COIP, por lo que, se vulneró el derecho a la defensa y el principio de legalidad”.¹²

Por consiguiente, considerando lo explicado y tomando en cuenta lo por la Corte Constitucional en las sentencias citadas, que constituyen jurisprudencia vinculante, se puede evidenciar que, en el presente caso se ha violado de manera flagrante la garantía básica del debido proceso a la debida motivación de las resoluciones judiciales, ya que la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, en la sentencia 08 de septiembre de 2020, emitida por voto de mayoría (Javier de la Cadena Correa y José Layedra Bustamante), **no debía limitarse a citar normas, agrupar y resumir los antecedentes del caso, sino que debía justificar por medio de un análisis lógico y coherente la resolución a la que arribó, mediante la explicación, clara, individual y pormenorizada, de la pertinencia de la aplicación de las normas a los hechos del caso, cosa que en el presente caso no ocurrió.**

Por su parte, respecto del cargo de indebida aplicación del artículo 30.4 del Código Penal, no escapará a su ilustrado criterio, que la Sala cae en el mismo yerro de falta de motivación y hacer una resolución grupal, de los que considera compartimos esa alegación; es así que, la Sala impugnada, enumera a las personas que según ellos coincidimos en la alegación o cargo casacional, sin reparar que el sustento y argumento son diferentes, a saber:

“Esgrimidas por los encartados FONTANA VICTOR, PHILLIPS WILLIAM y VERDUGA PEDRO; las cuales, a fin de ser despejadas, se lo hará siguiendo la misma línea estructurada del examen casacional en torno al problema jurídico, el cual estriba en esta ocasión, con aquella circunstancia de la infracción, desde el ala de las agravantes y que versa en la pandilla. Luego copia los artículos cuestionados del Código Penal, luego copia de manera textual gran parte de la sentencia del 22 de julio de 2020, emitida por el Tribunal de apelación; y, posteriormente sin un análisis importante, decide:

“Una vez que han quedado claramente establecidos tanto los supuestos que prevé la norma, así como los elementos fácticos y de razonamiento fijados por el Juzgador Ad quem en el fallo ahora impugnado en sede de casación; todo ello a fin de realizar la contraposición necesaria en aras de que, a través del examen casacional a partir de la alegación planteada, se pueda evidenciar si existe o no error de derecho alguno que debe ser casado; este Tribunal no encuentra aquello, **ya que -conforme queda evidenciado, el juzgador de instancia hace el abordaje y análisis pertinente y aplica adecuadamente la norma, por tanto, cualesquiera alegación en contrario se desvanece y resulta improcedente.**”

¹² Tomado del Recurso de Casación presentado por VICTOR MANUEL FONTANA ZAMORA.

GROUP

The first part of the report deals with the general situation of the group. It is a very short and simple report, but it is very important. It is the first step in the process of understanding the group.

The second part of the report deals with the specific situation of the group. It is a very short and simple report, but it is very important. It is the second step in the process of understanding the group.

The third part of the report deals with the specific situation of the group. It is a very short and simple report, but it is very important. It is the third step in the process of understanding the group.

The fourth part of the report deals with the specific situation of the group. It is a very short and simple report, but it is very important. It is the fourth step in the process of understanding the group.

The fifth part of the report deals with the specific situation of the group. It is a very short and simple report, but it is very important. It is the fifth step in the process of understanding the group.

The sixth part of the report deals with the specific situation of the group. It is a very short and simple report, but it is very important. It is the sixth step in the process of understanding the group.

The seventh part of the report deals with the specific situation of the group. It is a very short and simple report, but it is very important. It is the seventh step in the process of understanding the group.

Es así que, ahondado en aquello de la improcedencia de las alegaciones que se agrupan en este tercer reproche, mismas que - **conforme obran planteadas en los términos que constan detallados en los sub puntos 4.1 al 4.16-, de manera adicional y que suyo también no permiten que prosperen, es debido a que en la forma en que han sido fundamentadas en audiencia**, caen en aquellos temas que no son pertinentes para este medio de impugnación extraordinario; tanto más que, huelga reiterar, con relación a la alegación de violación del artículo 30.4 CP, aquella norma ha sido suficiente y debidamente considerada por el Ad quem, constan criterios doctrinarios y normativos pertinentes sobre las agravantes, siendo así que, cuando el juzgador encuentra que el hecho delictivo ha sido cometido con una de tales circunstancias es deber aplicarlas; se detalla claramente que han encontrado que el sub lite se lo ha cometido con la participación de los veinte encartados ya sentenciados, estableciendo así que se dio aquella participación en pandilla, de lo cual resulta pertinente que se haya aplicado con lugar dicha circunstancia agravante aplicada, toda vez que, la conducta penalmente relevante -acorde así lo determinado correctamente por los jueces de instancia- se ha materializado a través de una estructura, en la cada uno de los miembros cumplen su rol; es por ello que tanto el A quo y el Ad quem determina acertadamente sobre la base de los hechos y la probanza por ellos analizada que se ha comprobado la agravante del artículo 30.4 CP, esto es, ejecutar el hecho punible en pandilla; de allí que, cualesquiera alegación en contrario, por ejemplo aquella que se orienta a pretender indicar que la actuación de varias personas en el delito de cohecho es un elemento del tipo penal, se desvanece al ser contrastada ya sea con los supuestos previstos en los artículos 285, 287 y 290 CP, y **sobre todo con los del artículo 30.4 ejusdem, normas que resultas estar debidamente aplicadas**. Por último, como contrapartida y efecto de la presencia de la agravante, también de suyo -resultado jurídico establecido en la ley-, deviene que la alegación de que no se han tomado en cuenta atenuantes, también se desvanece.

Es así que, desvanecidos que han sido este segundo grupo de alegaciones de violación de ley, se determina que las mismas resultan ser improcedentes.”

Por lo que nuevamente, no se pronuncian acerca de los argumentos presentados en mi recurso de casación y defendidos en audiencia pública, que en resumen solicitaba lo siguiente:

“5.3. TERCER CARGO INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 30, NUMERAL 4 DEL CÓDIGO PENAL. -

El tercer cargo se circunscribe en la indebida aplicación del artículo 30 numeral 4, del Código Penal, es decir de la circunstancias agravantes de la pena; la que nace, de primera mano, que ésta circunstancia no consta de la acusación fiscal, ni tampoco fue materia de debate, vulnerando el derecho a la defensa; pero además, la indebida aplicación, se colige que la descripción típica del delito de cohecho exige de manera genérica la participación de dos o más persona, por lo que es constitutiva de la misma, así como que, el concepto de pandilla se lo ha enmarcado en los elemento de otro tipo penal, lo que acredita el yerro incurrido.”

GROB

The first part of the report describes the general situation of the company and its activities. It includes a brief history of the company and its main products. The second part of the report describes the company's financial situation and its performance over the last year. It includes a detailed analysis of the company's income statement, balance sheet, and cash flow statement. The third part of the report describes the company's marketing strategy and its results. It includes a detailed analysis of the company's sales and marketing efforts. The fourth part of the report describes the company's human resources and its management. It includes a detailed analysis of the company's personnel and its management structure. The fifth part of the report describes the company's future prospects and its goals. It includes a detailed analysis of the company's opportunities and challenges.

The company has a long and successful history of providing high-quality products and services to its customers. It has a strong reputation in the market and a loyal customer base. The company's financial performance has been excellent over the last year, with a significant increase in sales and profits. The company's marketing strategy has been very effective, resulting in a steady increase in sales. The company's human resources are well-trained and motivated, and its management is experienced and efficient. The company's future prospects are very bright, and it is confident that it will continue to grow and succeed in the years ahead.

Por consiguiente, no se pronunciaron y no fundamentaron la razón para considerar, el por qué? no corresponde a una violación a mis derechos, que se haya tomado como una circunstancia agravante de la pena (realizar una conducta en pandilla), una situación que no constaba en la acusación fiscal, que no formó parte del debate judicial y que no es constitutiva del delito por el cual se me sentenció, convirtiendo a la sentencia impugnada en una resolución judicial inmotivada y arbitraria, contrariando lo dispuesto por la propia Corte Constitucional del Ecuador, que de manera clara en su jurisprudencia exige que la motivación de una sentencia no puede limitarse a citar normas y resumir los antecedentes del caso, sino que exige justificar por medio de un análisis lógico y coherente la resolución a la que arribó, mediante la explicación de la pertinencia de la aplicación de las normas a los hechos del caso.

Finalmente, y con respecto al **tercer cargo** qué realizo, para demostrar que la sentencia impugnada es inmotivada y vulnera el derecho a la seguridad jurídica, tengo que manifestar que del cuestionamiento realizado a la agrupación de la causal casacional, *en cuanto a la circunstancia agravante de pandilla*. [art. 30.4 CP], se infiere que las autoridades judiciales cuestionadas, se vuelven a pronunciar acerca de aspectos que ya fueron superados en la fase de admisibilidad del recurso de casación, violando de esta manera el principio de preclusión procesal y el derecho a la seguridad jurídica, evitando de resolver el recurso de casación en las cuestiones de fondo planteadas y dejando de cumplir con su deber de ser jueces que corrigen o avalan, la aplicación del derecho en la sentencia recurrida mediante el recurso de casación.

En este sentido la Corte Constitucional en su jurisprudencia se ha pronunciado acerca del principio de preclusión manifestando que:

La preclusión procesal es principio general del derecho, por el cual las etapas procesales se van cerrando sucesivamente, es decir, la posibilidad de contradicción de las partes en las fases procesales una vez evacuadas, se cierran inevitablemente y no es posible volver atrás, ya que hacerlo implicaría un desbalance procesal entre los contendientes.¹³

Es así que, conforme a este principio, se asegura no solo el respeto a las etapas existentes en un proceso, ocasionando que el cierre sucesivo de estas no hagan posible volver a revisarlas nuevamente, sino que además se garantiza la observancia de las normas jurídicas aplicables a cada una de las fases, lo cual genera certeza de que el ordenamiento jurídico será aplicado correctamente, otorgando en definitiva, seguridad jurídica en la tramitación de un proceso.

De tal forma, la interposición de un recurso abre una nueva fase dentro de un proceso, pero para que ocurra, la legislación procesal ha establecido requisitos y condiciones de obligatorio cumplimiento para su sustanciación, siendo uno de estos el periodo de tiempo que debe estimarse para ejercer este derecho.

¹³ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.º 031-10-SCN-CC, casos acumulados N.º 0044-10-CN, N.º 0045-10-CN, N.º 0046-10-CN y N.º 0047-10-CN.

GROUP

The first part of the report deals with the general situation of the group. It is a very important part of the report and it is very interesting to read. The second part of the report deals with the specific situation of the group. It is also a very important part of the report and it is very interesting to read. The third part of the report deals with the future of the group. It is also a very important part of the report and it is very interesting to read.

The first part of the report deals with the general situation of the group. It is a very important part of the report and it is very interesting to read. The second part of the report deals with the specific situation of the group. It is also a very important part of the report and it is very interesting to read. The third part of the report deals with the future of the group. It is also a very important part of the report and it is very interesting to read.

The first part of the report deals with the general situation of the group. It is a very important part of the report and it is very interesting to read. The second part of the report deals with the specific situation of the group. It is also a very important part of the report and it is very interesting to read. The third part of the report deals with the future of the group. It is also a very important part of the report and it is very interesting to read.

The first part of the report deals with the general situation of the group. It is a very important part of the report and it is very interesting to read. The second part of the report deals with the specific situation of the group. It is also a very important part of the report and it is very interesting to read. The third part of the report deals with the future of the group. It is also a very important part of the report and it is very interesting to read.

En ese sentido, se entiende que tras culminar el espacio temporal que otorga la ley para interponer un recurso, resulta improcedente la revisión del mismo. Esto, por respeto al principio de preclusión procesal, a las normas que se aplican a cada etapa y sobre todo por el respeto a los derechos de las partes intervinientes en un proceso, lo cual brinda seguridad jurídica”.¹⁴

Adicional, respecto al derecho a la seguridad jurídica, es importante destacar que, la Corte Constitucional lo definido de la siguiente manera:

“20.- La seguridad jurídica es un derecho constitucional transversal que irradia a todo el ordenamiento jurídico. El artículo 82 de la Constitución de la República establece lo siguiente respecto del mismo: *“El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”*.

21.- En general, del texto constitucional se desprende que el individuo debe contar con un ordenamiento jurídico previsible, claro, determinado, estable y coherente que le permita tener una noción razonable de las reglas del juego que le serán aplicadas. **Este debe ser estrictamente observado por los poderes públicos para brindar certeza al individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares establecidos previamente y por autoridad competente para evitar la arbitrariedad.**

22.- La Corte Constitucional, como guardián de la Constitución, al resolver sobre vulneraciones a este derecho, no le corresponde pronunciarse respecto de la correcta o incorrecta aplicación e interpretación de las normas infraconstitucionales, **sino verificar si en efecto existió una infracción a normas constitucionales, que implique que la judicatura haya fallado sin cumplir con su obligación del respeto a la Norma Suprema.”** ¹⁵ Lo renegrido me pertenece

En consecuencia, la seguridad jurídica implica, la confiabilidad en el orden jurídico y la sujeción de todos los poderes del Estado a la Constitución y a la ley, como salvaguarda para evitar que las personas, pueblos y colectivos sean víctimas del cometimiento de arbitrariedades.

Ahora, bien en el presente caso existe una violación flagrante a los derechos, explicados en párrafos anteriores, ya que en la sentencia impugnada en el análisis del cargo *en cuanto a la circunstancia agravante de pandilla. [art. 30.4 CP];, se señala lo siguiente:*

“Es así que, ahondado en aquello de la improcedencia de las alegaciones que se agrupan en este tercer reproche, mismas que - conforme obran planteadas en los términos que constan detallados en los sub puntos 4.1 al 4.16-, de manera

¹⁴ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.º 107-15-SEP-CC, caso N.º 1725-12-EP

¹⁵ Sentencia No. 1249-12-EP/19 / Jueza ponente: Karla Andrade Quevedo, CASO No. 1249-12-EP 17 de septiembre de 2019.

GROUP

The first part of the report is a general introduction to the group. It describes the group's purpose, its members, and its activities. It also discusses the group's history and its current status.

The second part of the report is a detailed description of the group's activities. It discusses the group's programs, its projects, and its achievements. It also discusses the group's financial situation and its future plans.

The third part of the report is a discussion of the group's impact on the community. It discusses the group's role in the community and its contribution to the well-being of the community. It also discusses the group's relationship with other groups in the community.

The fourth part of the report is a conclusion. It summarizes the group's activities and its impact on the community. It also discusses the group's future plans and its role in the community.

The fifth part of the report is a list of references. It lists the sources of information used in the report. It also lists the names of the group's members and the names of the people who helped with the report.

The sixth part of the report is a list of appendices. It lists the documents and materials that are included in the report. It also lists the names of the people who helped with the report.

The seventh part of the report is a list of footnotes. It lists the sources of information used in the report. It also lists the names of the group's members and the names of the people who helped with the report.

The eighth part of the report is a list of references. It lists the sources of information used in the report. It also lists the names of the group's members and the names of the people who helped with the report.

The ninth part of the report is a list of appendices. It lists the documents and materials that are included in the report. It also lists the names of the people who helped with the report.

The tenth part of the report is a list of footnotes. It lists the sources of information used in the report. It also lists the names of the group's members and the names of the people who helped with the report.

Acuerdo de la
-980-



adicional y que suyo también no permiten que prosperen, es debido a que en la forma en que han sido fundamentadas en audiencia, caen en aquellos temas que no son pertinentes para este medio de impugnación extraordinario; tanto más que, huelga reiterar, con relación a la alegación de violación del artículo 30.4 CP, aquella norma ha sido suficiente y debidamente considerada por el Ad quem, ...”

Es decir, se vuelve a realizar un examen de admisibilidad del recurso de casación presentado, cuando en auto de 24 de agosto de 2020, el Tribunal de Casación integrado por los doctores Javier De la Cadena Correa, José Layedra Bustamante y Milton Ávila Campoverde, **CONJUECES NACIONALES ENCARGADOS** de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia decidió:

(...) 4.- Decisión (...)4.9.- ADMITIR a trámite los cargos casacionales propuestos por el recurrente FONTANA ZAMORA VICTOR MANUEL, únicamente, por aquellos que refieren a: i) indebida aplicación del artículo 290 CP; ii) indebida aplicación del artículo 287 CP; y, iii) indebida aplicación del artículo 30.4 CP; estrictamente en los términos que se hacen constar en el subnumeral 3.2.8 de este auto.(...)”

En consecuencia, se realizó nuevamente un examen de admisibilidad del recurso de casación, ya que se supone que, si un recurso ha superado esta fase, es porque de manera rigurosa y con técnica jurídica se fundamentó la causal de **iii) indebida aplicación del artículo 30.4 CP**, y no como se pronuncia el Tribunal en la sentencia impugnada, señalando que “*conforme obran planteadas en los términos que constan detallados en los sub puntos 4.1 al 4.16-, de manera adicional y que suyo también no permiten que prosperen, es debido a que en la forma en que han sido fundamentadas en audiencia, caen en aquellos temas que no son pertinentes para este medio de impugnación extraordinario*”, evitando de esta manera resolver el recurso de casación en las cuestiones de fondo planteadas y dejando de cumplir con su deber de ser jueces que corrigen o avalan, la aplicación del derecho en la sentencia recurrida mediante el recurso de casación.

Además, en cuanto a la tramitación del recurso de casación, la Corte Constitucional ha dicho en sentencia N.º 169-15-SEP-CC, dictada en el caso N.º 0680-10-EP, que:

“... es imperioso para los jueces de la Corte Nacional de Justicia tener especial atención en aplicar la normativa específica del recurso de casación, así como los principios procesales durante el trámite que se otorgue a cada etapa, pues aquello garantizará la observancia del trámite propio de cada procedimiento judicial que garantizará el pleno cumplimiento de los cauces procesales correspondientes, protegiendo, además, la seguridad jurídica.(...)Las consideraciones expuestas permiten afirmar que existe una serie de supuestos que deben confluir para que opere el recurso de casación. En efecto, por su carácter formal y excepcional, este recurso puede prosperar con éxito únicamente bajo ciertas condiciones establecidas en el ordenamiento jurídico aplicable...”

Violentando de manera flagrante el principio de preclusión procesal y el derecho a la seguridad jurídica, tal como se ha denunciado en la presente acción extraordinaria de protección

GROUP

The first group of people who were involved in the project were the members of the committee. They were responsible for the overall direction and coordination of the project. They also had to ensure that the project was completed on time and within budget.

The second group of people who were involved in the project were the staff members. They were responsible for the day-to-day operations of the project. They also had to ensure that the project was completed on time and within budget.

The third group of people who were involved in the project were the external consultants. They were responsible for providing expert advice and guidance to the project team. They also had to ensure that the project was completed on time and within budget.

The fourth group of people who were involved in the project were the stakeholders. They were responsible for providing input and feedback to the project team. They also had to ensure that the project was completed on time and within budget.

The fifth group of people who were involved in the project were the volunteers. They were responsible for providing support and assistance to the project team. They also had to ensure that the project was completed on time and within budget.

The sixth group of people who were involved in the project were the sponsors. They were responsible for providing financial support and resources to the project team. They also had to ensure that the project was completed on time and within budget.

The seventh group of people who were involved in the project were the partners. They were responsible for providing expertise and resources to the project team. They also had to ensure that the project was completed on time and within budget.

The eighth group of people who were involved in the project were the clients. They were responsible for providing requirements and feedback to the project team. They also had to ensure that the project was completed on time and within budget.

5.2.3 VULNERACIÓN AL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LAS GARANTÍAS DEL DERECHO A LA DEFENSA, A NO SER PRIVADO DEL DERECHO A LA DEFENSA EN NINGUNA ETAPA O GRADO DEL PROCEDIMIENTO Y A SER ESCUCHADO EN EL MOMENTO OPORTUNO Y EN IGUALDAD DE CONDICIONES, ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 76, NUMERAL 7 LITERALES a) y c) DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA; EN CONCORDANCIA, CON EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. -

Continuando con la argumentación de mis derechos constitucionales vulnerados en la sentencia impugnada, se debe tomar en cuenta señores Jueces de la Corte Constitucional que, Fiscalía como titular de la acción penal pública, en la audiencia Evaluatoria y Preparatoria de Juicio, acusó por las conductas tipificadas en el art. 286 del Código Penal, en relación con el art. 233 de la Constitución de la República.

Con fecha 3 de enero de 2020, la doctora Daniella Camacho Herold, Jueza Nacional de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia resuelve llamar a juicio, a varios ciudadanos entre ellos: **Víctor Manuel Fontana Zamora, a quien FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO**, como lo indiqué acusó por presumir su participación en calidad de autor, en el delito de cohecho tipificado y sancionado **por el artículo 286 del Código Penal (CP), y para conocimiento de este caso y singularizado por ser ultractivo, ahora en el artículo 280, incisos 2º y 4º Código Orgánico Integral Penal.**

Más, mediante sentencia de fecha de 26 de abril de 2020, el Tribunal de Garantías Penal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los señores doctores: Iván León Rodríguez, Juez Nacional (e) Ponente, Marco Rodríguez Rúa e Iván Saquicela Rodas, Jueces Nacionales; dictan sentencia con la cual se resuelven:

“(...) 3.- Condenar a los sentenciados (...) VÍCTOR MANUEL FONTANA ZAMORA, (...), a las penas privativas de libertad de OCHO (8) AÑOS, a cada uno de ellos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 287 CP, en relación con el artículo 290 ejusdem, sin atenuación de la misma, por haber concurrido la agravante no constitutiva, ni modificatoria de la infracción prevista en el artículo 30.4 ejusdem ejecutar el hecho punible en pandilla, según la regla contenida en el artículo 72 del cuerpo de leyes citado (...)”, entre otras

Adicionalmente, como señalé en los antecedentes de esta acción extraordinaria de protección, presenté recurso de apelación, mismo que fue negado, luego interpuse recurso de casación que fue admitido en un primer momento (sustentado en el cargo de violación a mis derechos constitucionales a la defensa y al principio de congruencia); sin embargo, en la sustanciación y resolución del recurso de casación, de manera inmotivada fue declarado improcedente mediante la sentencia que ahora estoy impugnando, por lo que se violentó mi derecho a la defensa, toda vez que, mi persona no tuvo oportunidad de contradecir o debatir el cambio de tipo penal, toda vez que, la viabilidad de la defensa se vio afectada al existir dentro de los hechos imputados, elementos que no pueden ser atacados con los argumentos planteados como defensa sobre la acusación fiscal, ya que esta fue modificada por el



tribunal penal, y avalada el tribunal de apelación y luego por el tribunal de casación, es decir, en ningún momento se tomó en cuenta la flagrante violación a mis derechos constitucionales contenidos en el derecho al debido proceso en las garantías del derecho a la defensa, establecidas en el artículo 76, numeral 7 literales a) y c) de la Constitución de la República; en concordancia, con el principio de congruencia penal.

Consecuentemente paso a demostrar el total estado de indefensión, que fui objeto en el presente proceso de juzgamiento, de acuerdo a lo siguiente:

El **principio de congruencia** consiste en la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado por las partes y la decisión del juez. Puede adoptar dos modalidades: La interna y la externa. La **externa** que es la propiamente dicha, se refiere a la concordancia o armonía entre la pretensión y la resolución que se pronuncia sobre ella. La interna, es la que mira a la concordancia entre la parte motiva y la resolutive del fallo. Dicho de otra manera el juez, por respeto al **principio de congruencia no puede ni debe resolver más allá de la pretensión del fiscal cuando se trata de un proceso penal, vale decir que el juez podrá resolver siempre menos que lo que pretende el fiscal, pero nunca más (...)**" (Zambrano, 2014: 1).

En este mismo sentido, la Propia Corte Nacional de Justicia, se ha pronunciado en relación al principio de congruencia, señalando que, para considerar que existe violación del derecho a la defensa en el juicio, debe afectarse el principio de congruencia o compatibilidad y adecuación existente entre el hecho imputado en el proceso y la sentencia. **Así, los hechos imputados en la formulación de cargos deben guardar pertinencia con los hechos fácticos por los cuales se formula la acusación fiscal; de igual forma, los cargos por los cuales la fiscalía formula la acusación son los hechos taxativamente definidos por los que debe llamarse a juicio. El tipo penal que forma parte del requerimiento de llamamiento a juicio, con todas sus circunstancias, ya sean estas agravantes o atenuantes, constituyen el límite fáctico del juicio y, por ende, de la futura sentencia. Es decir, el auto de llamamiento a juicio fija los hechos, de los que el tribunal no puede apartarse.** Entender lo contrario implica desvirtuar el sustrato o cambiar el tipo penal por el cual se sustanció el proceso.¹⁶

Como es bien conocido, conforme lo determina el artículo 195 de la Constitución de la República y el artículo 411 del Código Orgánico Integral Penal, la Fiscalía ejerce de manera privativa la titularidad de la acción penal pública; de ésta manera, la acusación en contra del compareciente, se delimitó como autor directo del delito tipificado y sancionado en el artículo 286 del Código Penal, en relación con el artículo 233 de la Constitución, más no consta, ni de la acusación, ni del relato fáctico, ni de los debates, ni otros, relación con la conducta y sanción establecida en el artículo 287 del Código Penal, inobservando los mandatos prescritos en los artículos 619 numerales 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal, y 140 inciso segundo del Código Orgánico de la Función Judicial,

¹⁶**Corte Nacional de Justicia Cuadernos de jurisprudencia penal.** Corte Nacional de Justicia 2012-2014. Primera edición. Quito: Corte Nacional de Justicia, 2014. (Colección: Gestión jurisdiccional. Serie: Cuadernos de trabajo, 2), pags 22 y 23, disponible en:

https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/Produccion_CNJ/coleccion%20jurisprudencial/Penal.pdf

GROUP

The first part of the report is a general introduction to the group. It describes the purpose of the group, its members, and its activities. The second part of the report is a detailed description of the group's activities. It includes a list of the group's members, a list of the group's activities, and a list of the group's achievements.

The third part of the report is a summary of the group's activities. It includes a list of the group's members, a list of the group's activities, and a list of the group's achievements.

The fourth part of the report is a conclusion. It summarizes the group's activities and achievements, and it provides a list of references. The fifth part of the report is a list of references. It includes a list of the group's members, a list of the group's activities, and a list of the group's achievements.

The sixth part of the report is a list of references. It includes a list of the group's members, a list of the group's activities, and a list of the group's achievements. The seventh part of the report is a list of references. It includes a list of the group's members, a list of the group's activities, and a list of the group's achievements.

The eighth part of the report is a list of references. It includes a list of the group's members, a list of the group's activities, and a list of the group's achievements. The ninth part of the report is a list of references. It includes a list of the group's members, a list of the group's activities, and a list of the group's achievements.

The tenth part of the report is a list of references. It includes a list of the group's members, a list of the group's activities, and a list of the group's achievements.

Concomitante con lo señalado, el principio de congruencia comporta un aspecto que incide en la materialización de principios y derechos fundamentales, como el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho de contradicción, vulnerándose en el presente caso en todo momento estos derechos ya que, en el trámite del presente proceso penal, mi persona no tuvo oportunidad de contradecir o debatir el cambio del tipo penal, toda vez que, la viabilidad de la defensa se vio afectada al existir dentro de los hechos imputados, elementos que no pueden ser atacados con los argumentos planteados como defensa en contra de la acusación fiscal, lo que no abarca solamente el bien jurídico tutelado o la modalidad de un mismo delito, sino que efectivamente los argumentos planteados no alcanzan para contradecir los elementos introducidos por el tercero, provocando además indefensión; es decir que, la decisión fue alterada por el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, luego avalada por el Tribunal de Apelación y finalmente inobservada por el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia. Por tanto, se evidencia la vulneración, flagrante, de mi derecho a la defensa, en a las garantías básicas del derecho a la defensa, establecidas en el artículo 76, numeral 7 literales a) y c) de la Constitución de la República.

En este sentido la Constitución de la República de Ecuador en el artículo 76 numeral 7 señala que el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

- a) *Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (...)*
- c) *Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. (...)*

De esta forma, el derecho al debido proceso, es un derecho de sustancial importancia por cuanto protege un conjunto de garantías de todas las personas, dentro de todo proceso en el que se determinen derechos, con el objetivo de que no queden en indefensión y que se logre la materialización de un proceso justo y equitativo.

En relación al derecho al debido proceso en la garantía de la defensa, en la sentencia N°. 261-14-EP/20, la Corte Constitucional determinó que, el derecho a la defensa, dentro de un proceso jurisdiccional o de cualquier índole, permite a las partes sostener sus pretensiones y rebatir los fundamentos de la parte contraria y que las personas puedan acceder a los medios necesarios para efectivizar sus demás derechos y hacer respetar sus pretensiones en el desarrollo del proceso jurisdiccional. De esta manera, el derecho a la defensa debe ser garantizado en todas las etapas del proceso, sin que pueda obstaculizarse ni negarse su ejercicio en ningún momento procesal, pues ello conllevaría a generar un estado de indefensión.¹⁷

En esta línea de ideas, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala:

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo

¹⁷Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N°. 261-14-EP/20. Jueza ponente Karla Andrade Quevedo, 04 de enero de 2020, párr. 20

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

También es importante precisar el alcance del derecho a ser oído, sobre esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que:

“Ese derecho implica, por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos y la aportación de prueba). Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que implica que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido. Esto último no significa que siempre deba ser acogido sino que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido”¹⁸.

Por lo que se observa, el estándar jurisprudencial establece que un proceso es justo cuando se han respetado las garantías procesales, siempre y cuando las personas sean oídas con las debidas garantías. En consecuencia, al violentarse el principio de congruencia en el presente caso, también se afectan a las garantías básicas del derecho a la defensa, contenida en los literales a) y c) del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República de Ecuador, en concordancia con el artículo 75 Ibídem, que refieren a que ninguna persona puede ser privada del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, y, el derecho a ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones; por lo que, denuncio estas vulneraciones a mis derechos constitucionales a través de la presente acción extraordinaria de protección y solicito a la Corte Constitucional del Ecuador que por las atribuciones que la Constitución le otorga, que tutele mis derechos constitucionales y los reivindique, conforme los postulados del Estado Constitucional de Derechos y Justicia.

5.2.4 VULNERACIÓN AL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA GARANTÍAS DEL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA y EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 76, NUMERALES 2 y 5 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.-

Como se ha demostrado en la argumentación de la presente acción extraordinaria de protección, la sentencia de fecha 08 de septiembre de 2020, emitida por voto de mayoría (Javier de la Cadena Correa y José Layedra Bustamante), por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, **INTEGRADA POR CONJUECES NACIONALES ENCARGADOS**, se encuentra inmotivada, porque no se dio respuesta a los argumentos presentados por el compareciente; peor aún, no se hizo un análisis individualizado y detallado en relación con los argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General del Estado, las

¹⁸ Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 13 de octubre de 2011, caso Barbani Duarte y otros vs. Uruguay, párr. 122.

GROUP

normas constitucionales y penales aplicables al caso, sino más bien, lo que se hizo es copiar partes de manera textual el fallo de apelación dictado el 22 de julio de 2020, por el Tribunal de apelación de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los Jueces encargados, doctores: David Jacho Chicaiza, Juez Nacional (e) Ponente, Wilmán Terán Carrillo y Dilza Muñoz Moreno, Jueces Nacionales (e), por lo que el Tribunal de Casación de manera tácita avaló las vulneraciones a mis derechos constitucionales al debido proceso en las garantías básicas a la presunción de inocencia y el principio de favorabilidad contemplados en los numerales 2 y 5 del artículo 76, de la Constitución de la República, lo que paso a fundamentar de la siguiente manera:

Para que se configure el delito por el cual fui sentenciado, se necesitaba que la conducta atribuida a los sentenciados, se haya adecuado con la finalidad de que los funcionarios públicos supuestamente cohechados, cometan en ejercicio de sus cargos un delito u otros delitos, en este sentido el tribunal de casación tácitamente hace suyos los argumentos del Tribunal de apelación y los copia textualmente, en su sentencia, sin razonar, ni pronunciarse, si esta posición es o no vulneradora a los derechos constitucionales, en este sentido vale la pena destacar que sobre lo dicho en la sentencia impugnada se copia, lo siguiente:

“Pero, con la aceptación de ofertas o promesas, o el recibimiento de dones o presentes, ¿Qué delito o delitos cometieron los encausados?

Bien, de la valoración del caudal probatorio, se desprende que los encartados recibieron dinero en efectivo o vía cruce de facturas, derivado de la expectativa positiva contractual con el Estado, que tenían los extraneos, con los servidores públicos, para que éstos últimos, aprovechándose de la representación popular o del cargo que ejercían, o de la influencia e injerencia que tenían, por estar en las más altas esferas del poder político, les favorezcan o sigan favoreciendo, ya sea por medio de la adjudicación de contratos, concesión de favores en el ámbito de la contratación pública, pago de planillas, convenios de pagos y más, soslayando los principios de transparencia, eficiencia, universalidad, publicidad, así como normas que informan el sistema de contratación pública, lesionando por tanto el correcto funcionamiento de la administración pública conforme se desprende del onus probandi documental; ergo, se avizora que, las ofertas o promesa concretadas, los dones o presentes recibidos, traducidos todos en dinero en efectivo y vía cruce de facturas, tuvieron fuera de toda duda, **la finalidad de cometer otras acciones típicas, antijurídica y culpables, tales como los delitos de tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.**

Sobre este punto cabe hacer una digresión, a efectos de explicar el cometimiento del delito, como finalidad del “soborno”, **pues, esta consecuencia o finalidad del delito, no impone a la administración de justicia el requisito de “prejudicialidad” para iniciar el procedimiento por cohecho pasivo propio agravado**, ya que el tenor literal de la norma es suficientemente claro al establecer que, la dádiva es receptada “por cometer, en el ejercicio de su cargo, un delito”, así de sencillo, sin más exigencia....”(resaltado me corresponde)

Consecuentemente, el tribunal de casación en la sentencia impugnada, acepta que no se requiere de

una sentencia ejecutoriada pasada por cosa juzgada, para destruir la presunción de inocencia (que es una garantía del debido proceso) de una persona, indicando que la finalidad del delito por el cual se me acusó, no impone a la administración de justicia el requisito de “prejudicialidad” para la configuración del delito de cohecho, situación que se convierte en una violación flagrante a la garantía básica del debido proceso, en el derecho a la presunción de inocencia, que se entiende que es una garantía también derivada del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Es así como la Constitución, en el artículo 76 (2), establece que:

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

...() 2 Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.
(resaltado y subrayado me corresponde)

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 (2), reconoce:

Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. (resaltado me corresponde)

En igual orden de ideas, se ha pronunciado la propia Corte Constitucional, en sentencia N°. 14-15-CN/19, sobre los efectos generados del derecho de la presunción de inocencia, a saber:

“17. La presunción de inocencia es un derecho fundamental para diferenciar un sistema inquisitivo de uno acusatorio. En el primero se presume la culpabilidad de las personas y en el segundo la inocencia. Por este principio, se protege a las personas del uso arbitrario y autoritario del poder punitivo del Estado, que a lo largo de la historia ha producido graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos.

18. Del derecho a la presunción de inocencia se derivan algunos efectos jurídicos importantes: i) la presunción de inocencia es derecho que limita al poder punitivo, tanto en lo legislativo como en lo procesal; ii) **se debe presumir la inocencia de cualquier persona y, en consecuencia, se le debe tratar como inocente antes y durante el proceso penal;** iii) la presunción de inocencia debe vencerse mediante pruebas lícitas de culpabilidad y se la debe declarar en sentencia; y, iv) la carga de la prueba la tiene quien ejerce las funciones de fiscal o la persona que acuse.

19. En consecuencia, establecer legislativamente un tipo penal que presuma la culpabilidad, **tratar como culpable a una persona antes de una sentencia condenatoria, establecer la carga probatoria al indagado, investigado o procesado penalmente para que demuestre su inocencia, son violaciones al derecho a la presunción de inocencia y, por tanto, a la Constitución.**”¹⁹ (lo resaltado me pertenece)

¹⁹Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N°. 14-15-CN/19. Juez ponente Ramiro Avila Santamaría, 14 de mayo de 2010, párr. 17, 18 y 19.

Entonces queda evidenciado, que en el presente caso, se han cometido una serie de arbitrariedades, llegando al extremo de considerar como un requisito de prejudicialidad, a una garantía del debido proceso, es más, que esta garantía, no sea necesaria en el juzgamiento de una conducta penal o como un elemento constitutivo de un delito; lo dicho, a todas luces llevó a que las Autoridades Judiciales en la sentencia impugnada, me hayan considerado y tratado como culpable, antes de que se haya dictado una sentencia en donde se demuestre la existencia de los delitos que presumiblemente se hayan cometido, lo que es violatorio al derecho a la presunción de inocencia y, por tanto, a la Constitución, como lo ha destacado la propia Corte Constitucional.

Para reforzar este criterio es necesario indicar que recién en sentencia de fecha de 26 de abril de 2020, el Tribunal de Garantías Penal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los señores doctores: Iván León Rodríguez, Juez Nacional (e) Ponente, Marco Rodríguez Rúa e Iván Saquicela Rodas, Jueces Nacionales resuelven:

“7.- De acuerdo a lo prescrito en el artículo 626 COIP, toda vez que en el transcurso de la audiencia de juicio, han aparecido datos relevantes que permiten presumir el cometimiento de otros delitos, tales como: ***peculado, enriquecimiento ilícito público, enriquecimiento ilícito privado, lavado de activos, testaferrismo, concusión***, así como la posible participación de las siguientes personas: RAFAEL CORREA DELGADO, JORGE GLAS ESPINEL, ALEXIS MERA GILER, VINICIO ALVARADO ESPINEL, MARÍA DUARTE PESANTES, WALTER SOLÍS VALAREZO, PAMELA MARTÍNEZ LOAYZA, VIVIANA BONILLA SALCEDO, CHRISTIAN VITERI LÓPEZ, DORIS SOLIZ CARRIÓN y GALO MORA WITT, en sus calidades de Secretarios Ejecutivos del movimiento político Alianza País; TOMISLAV TÓPIC, Accionista de la empresa TELCONET; JIMMY SALAZAR GASPAS, representante legal de la empresa Nexo Global; MARCELO HERDOÍZA CRESPO, representante legal de la empresa Herdoíza Crespo; y, JOSÉ CONCEICAO SANTOS FILHO, Superintendente de la empresa ODEBRECHT, se ordena que se envíen a la FGE copias certificadas de todo lo actuado en la etapa de juicio, incluyendo esta sentencia, a fin de que se inicien las investigaciones del caso; para tal cumplimiento, la señora FGE informará por escrito a este Tribunal de mérito, acerca de los avances de su investigación, con la información detallada de las diligencias que han sido practicadas. Así por ejemplo, FGE deberá investigar en torno a quién y cómo se pagaron los cánones arrendaticios correspondientes al contrato de arrendamiento, años 2011 al 2013, suscrito entre la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP y el señor Manolo Díaz Vega, de la oficina 2C y los parqueaderos 44 y 45 del edificio Concorde.” (resaltado y cursivas me corresponden)

Es decir, recién existe la orden de investigar las supuestas conductas por las cuales se calificó un delito por el cual fueron condenadas más de veinte personas; por lo tanto, a todas luces se configura la violación a la garantía básica del debido proceso, en el derecho a la presunción de inocencia y sus efectos jurídicos que son: i) la presunción de inocencia es derecho que limita al poder punitivo, tanto en lo legislativo como en lo procesal; ii) **se debe presumir la inocencia de cualquier persona y, en consecuencia, se le debe tratar como inocente antes y durante el proceso penal**; iii) la presunción de inocencia debe vencerse mediante pruebas lícitas de culpabilidad y se la debe declarar en sentencia;

Necesito alerta y oke
- 988 -



y, iv) la carga de la prueba la tiene quien ejerce las funciones de fiscal o la persona que acuse, señalados expresamente por la Corte Constitucional del Ecuador.

Finalmente, y como un elemento adicional para vislumbrar la serie de arbitrariedades cometidas por las Autoridades Judiciales en el presente caso, se debe mencionar que en ningún momento se han aplicado principios básicos como el de favorabilidad (en mi caso), el principio de legalidad y de ultra actividad de la ley penal en favor del reo; incluso, en el caso de un sentenciado y no recurrente, de oficio, se le empeora su situación, violentando de manera flagrante el principio "*non reformatio in peius*," que es el derecho a que no se podrá empeorar la situación de la persona que recurre, etc.

Situaciones lesivas a los derechos de todos los sentenciados, pero que en mi caso debo destacar que, no se aplicó en ningún momento el principio de favorabilidad penal que ha sido desarrollado de la siguiente manera:

La Constitución, en el artículo 76 (5), establece que:

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

(...) 5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora." (resaltado me corresponde)

Concomitante, con lo señalado la propia Corte Constitucional en sentencia N°. 10-16-CN/19, ha señalado sobre este derecho que:

"24. Ahora bien, este Organismo resalta que en materia penal es aplicable el principio de favorabilidad previsto en el artículo 76 numeral 5 de la Constitución de la República. **Según este principio, cuando una nueva ley penal contiene previsiones más favorables, se aplicará, incluso, a los hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia"** ²⁰.

Cosa contraria, que ha pasado en el presente caso, ya que al compareciente en este proceso penal, al cual he sido sometido, siempre se ha tratado de empeorar mi situación, sin tomar en cuenta ningún principio, que ha sido destacado en esta acción extraordinaria de protección, especialmente el principio de favorabilidad, lo que tiene una estrecha relación con la vulneración a ser juzgado por un juez independiente e imparcial, como lo he señalado en al inicio de esta demanda.

En consecuencia, tengo que destacar que ahora la Corte Constitucional del Ecuador tiene la oportunidad de tutelar mis derechos constitucionales vulnerados, para que no sea necesario acudir al

²⁰Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N°. 10-16-CN/19. Juez ponente Hernán Salgado Pesantes, 28 de agosto de 2019, párr. 24.

Sistema Interamericano de Derechos Humanos; y, que eventualmente el Estado Ecuatoriano sea condenado ante la comunidad internacional por las graves violaciones a mis derechos humanos denunciadas a la Corte Constitucional del Ecuador, mediante la presente demanda.

6. SI LA VIOLACIÓN OCURRIÓ DURANTE EL PROCESO, LA INDICACIÓN DEL MOMENTO EN QUE SE ALEGÓ LA VIOLACIÓN ANTE LA JUEZA O JUEZ QUE CONOCE LA CAUSA. -

La violación de mis derechos constitucionales, principalmente ocurrió en la expedición de la sentencia que declara improcedente mi recurso de casación, de fecha 08 de septiembre de 2020 y notificada el mismo día, emitida por voto de mayoría (Javier de la Cadena Correa y José Layedra Bustamante), por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, **INTEGRADA POR CONJUECES NACIONALES ENCARGADOS**; sin embargo, dejo constancia que también alegué la vulneración a mis derechos constitucionales en la presentación y fundamentación de mi recurso de casación, situación que no fue tomada en cuenta y peor aún tratada por ninguna autoridad judicial, dejando a un lado el rol de garantista de los derechos, que tienen los Jueces, dejando que, se pulvericen totalmente mis derechos constitucionales y que hoy son motivo de esta denuncia constitucional.

7. PRETENSIÓN CONCRETA. -

Por lo expuesto, señores Jueces de la Corte Constitucional solicito se sirvan declarar la vulneración de mis derechos constitucionales **a ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente**, el derecho al debido proceso en **la garantía de la debida motivación de las resoluciones judiciales**, en **las garantías del derecho a la defensa**, **a no ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento**, **a ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones**, **a la presunción de inocencia y el principio de favorabilidad**, establecidos en los artículos 76, numerales 2, 5 y 7, literales a), c) y k) de la Constitución de la República del Ecuador.

En consecuencia, solicito que el Pleno de la Corte Constitucional se sirva ordenar en sentencia, la reparación integral material e inmaterial de los mismos, **dejando sin efecto la sentencia de fecha 08 de septiembre de 2020 y notificada el mismo día, emitida por voto de mayoría (Javier de la Cadena Correa y José Layedra Bustamante), por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, INTEGRADA POR CONJUECES NACIONALES ENCARGADOS**, para que otro Tribunal con Jueces imparciales e independientes, Titulares y definitivos de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, conozcan, sustancien y resuelvan el recurso de casación interpuesto por **VICTOR MANUEL FONTANA ZAMORA**, respetando los derechos constitucionales y convencionales, el ordenamiento jurídico pertinente y la jurisprudencia obligatoria de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

8.- CALIFICACIÓN Y ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE

GROUP

1. The first group is the group of people who are interested in the study of the history of the world.

2. The second group is the group of people who are interested in the study of the history of the United States.

3. The third group is the group of people who are interested in the study of the history of the United States and the world.

4. The fourth group is the group of people who are interested in the study of the history of the United States and the world.

5. The fifth group is the group of people who are interested in the study of the history of the United States and the world.

6. The sixth group is the group of people who are interested in the study of the history of the United States and the world.

7. The seventh group is the group of people who are interested in the study of the history of the United States and the world.

PROTECCIÓN.-

Señores Jueces Constitucionales que en su momento conformarán la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, sírvanse admitir esta acción extraordinaria de protección por cumplir con los fundamentos constantes en el Art. 61 de la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y por no incurrir en las causales de inadmisión señaladas en el Art. 62 del mismo Cuerpo de leyes.

Para ello cumplo con argumentar cada uno de estos requisitos:

8.1. Argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa e inmediata, por acción u omisión de la autoridad judicial, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso.

En este punto, es muy importante destacar que la Corte Constitucional en sentencia N°. 1967-14-EP/20, ha señalado sobre este requisito de admisibilidad lo siguiente:

“17. Entre los requisitos de admisibilidad de una demanda de acción extraordinaria de protección, el artículo 62.1 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante, LOGCC) establece el siguiente:

Art. 62.- [...] 1. Que exista un argumento claro sobre el **derecho violado y la relación directa e inmediata, por acción u omisión de la autoridad judicial**, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso. (resaltado me corresponde)

18. Una forma de analizar el requisito de admisibilidad establecido en la disposición legal recientemente citada es la siguiente: un cargo configura una argumentación completa si reúne, al menos, los siguientes tres elementos:

18.1. Una **tesis o conclusión**, en la que se afirme cuál es el derecho fundamental cuya vulneración se acusa (el "derecho violado", en palabras del art. 62.1 de la LOGCC).

18.2. Una **base fáctica** consistente en el señalamiento de cuál es la "acción u omisión judicial de la autoridad judicial" (referida por el art. 62.1 de la LOGCC) cuya consecuencia habría sido la vulneración del derecho fundamental. Tal acción u omisión deberá ser, naturalmente, un aspecto del acto judicial objeto de la acción.

18.3. Una **justificación jurídica** que muestre por qué la acción u omisión judicial acusada vulnera el derecho fundamental en forma "directa e inmediata" (como lo precisa el art. 62.1 de la LOGCC).

19. Cabe hacer aquí una doble aclaración: en primer lugar, que los mencionados elementos no necesariamente se contienen de manera explícita en la demanda de acción extraordinaria de protección, sino que también pueden estarlo de modo implícito; y, en segundo lugar, que si bien tales elementos pueden orientar la formulación, ya de una demanda, ya de una motivación judicial, ellos no configuran un esquema rígido que funcione a la manera de simple "lista de verificación "; antes

bien, siempre debe hacerse un uso razonable de tales elementos”.²¹

En sentido, señores Jueces de la Corte Constitucional, del análisis y los fundamentos expuestos a lo largo de esta demanda, podrán advertir que la presente acción extraordinaria de protección contiene argumentos claros, sobre los derechos constitucionales vulnerados por los **Conjueces Nacionales Encargados**, Javier de la Cadena Correa y José Layedra Bustamante, integrantes de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, en la sentencia de mayoría de fecha 08 de septiembre de 2020, con independencia de los hechos que dieron lugar al juicio penal realizado en mi contra, y contienen la suficiente fundamentación jurídica para que se declare la vulneración de los derechos constitucionales expuestos a lo largo de esta demanda.

En virtud de ello, se ha explicado con claridad que la sentencia impugnada ha violado los derechos constitucionales: **a ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente**, el derecho al debido proceso en **la garantía de la debida motivación de las resoluciones judiciales**, en **las garantías del derecho a la defensa**, **a no ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento**, **a ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones**, **a la presunción de inocencia y el principio de favorabilidad**, establecidos en los artículos 76, numerales 2, 5 y 7, literales a), c) y k) de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que de la revisión de esta demanda pueden darse cuenta que la relación inmediata y directa de estas violaciones a los derechos constitucionales están plenamente justificadas y cumplen de manera explícita e implícita con los requisitos solicitados por la Corte Constitucional del Ecuador.

8.2.-Justificación argumentada sobre la relevancia constitucional del problema jurídico y de la pretensión.-

La relevancia constitucional del presente caso, si bien está acreditada con los propios argumentos de la demanda que estoy presentando, también deberán considerar que un caso originado en el sistema de justicia penal ordinario, que abarca un proceso judicial penal seguido en mi contra, que ha estado y se encuentra en medio de una disputa con una alta carga de presión y rivalidad política de carácter nacional, ya que abarca, un juzgamiento penal en contra de un ex – Presidente, ex - Vicepresidente de la República, varios ex - Ministros de Estado, entre otros ex funcionarios.

Adicionalmente, el tratamiento de la presente acción extraordinaria de protección, como ya lo mencioné podría otorgarle a la Corte Constitucional la posibilidad de pronunciarse sobre mis derechos constitucionales vulnerados, para que no sea necesario acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos; y, que eventualmente el Estado Ecuatoriano sea condenado ante la comunidad internacional por las graves violaciones a mis derechos humanos denunciadas a la Corte Constitucional del Ecuador, mediante la presente demanda.

²¹**Corte Constitucional del Ecuador.** Sentencia N°. 1967-14-EP/20. Juez ponente Alí Lozada Prado, 13 de febrero de 2020,

Adicionalmente, en cuanto a la pretensión de esta demanda, ésta encaja en la justificación de la relevancia del problema jurídico, toda vez que no se está reclamando una situación injusta particular y netamente subjetiva, sino más bien, reclamo el cumplimiento de derechos constitucionales y garantías básicas del debido proceso, aplicables a todos los ciudadanos y habitantes del país.

8.3.-El fundamento de la acción no se agote solamente en la consideración de lo injusto o equivocado de la sentencia.-

La presente acción, es objetiva en cuanto al análisis de la sentencia impugnada, y las violaciones de derechos constitucionales realizados en la resolución del recurso de casación presentado por mi persona, evitando emitir algún criterio o argumento respecto de lo justo o injusto que puede ser la sentencia demandada.

Hay que tomar en cuenta que este requisito, en la mayoría de casos, es considerado bajo la óptica subjetiva del juez encargado de estudiar la admisibilidad del caso, es por ello que se hace preciso recalcar que, ni la acción ni la pretensión contenidas en esta demanda se fundamentan en cuestionar lo justo o equivocado de la sentencia, es decir no se trata de la mera inconformidad con las decisiones impugnadas; más bien, mi pretensión tiene como fundamento la declaración de vulneración de los derechos constitucionales alegados y su reparación integral.

8.4.- El fundamento de la acción no se sustenta en la falta de aplicación o errónea aplicación de la ley.-

Los fundamentos y argumentos expuestos se refieren exclusivamente a violaciones de carácter constitucional. Si se ha citado normas secundarias, es como simple referencia y complemento de los derechos fundamentales mencionados.

Las conculcaciones referidas, la doctrina y jurisprudencia citadas, son todas de carácter constitucional y convencional.

8.5.- El fundamento de la acción no se refiere a la apreciación de la prueba por parte de la jueza o juez.-

Se puede evidenciar fácilmente, que en ninguna parte de esta demanda, se ha hecho referencia a actuación probatoria alguna o apreciación de la prueba, pero si la vulneración de derechos que puede ocurrir cuando se ATROPELLAN el derecho a ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente, el derecho al debido proceso en la garantía de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en las garantías del derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y el principio de favorabilidad. Los argumentos han sido delimitados al ámbito constitucional, sobre todo el análisis de la sentencia emitida el 08 de septiembre de 2020, por los **CONJUECES NACIONALES ENCARGADOS**, Javier de la Cadena Correa y José Layedra Bustamante, integrantes de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, objeto de la presente acción y la falta de análisis de la violación a mis derechos constitucionales en

THEORY

The first part of the paper is devoted to a review of the existing literature on the topic. The second part presents the theoretical framework of the study. The third part discusses the empirical findings. The fourth part concludes the paper.

The first part of the paper is devoted to a review of the existing literature on the topic. The second part presents the theoretical framework of the study. The third part discusses the empirical findings. The fourth part concludes the paper.

The first part of the paper is devoted to a review of the existing literature on the topic. The second part presents the theoretical framework of the study. The third part discusses the empirical findings. The fourth part concludes the paper.

The first part of the paper is devoted to a review of the existing literature on the topic. The second part presents the theoretical framework of the study. The third part discusses the empirical findings. The fourth part concludes the paper.

The first part of the paper is devoted to a review of the existing literature on the topic. The second part presents the theoretical framework of the study. The third part discusses the empirical findings. The fourth part concludes the paper.

The first part of the paper is devoted to a review of the existing literature on the topic. The second part presents the theoretical framework of the study. The third part discusses the empirical findings. The fourth part concludes the paper.

The first part of the paper is devoted to a review of the existing literature on the topic. The second part presents the theoretical framework of the study. The third part discusses the empirical findings. The fourth part concludes the paper.

The first part of the paper is devoted to a review of the existing literature on the topic. The second part presents the theoretical framework of the study. The third part discusses the empirical findings. The fourth part concludes the paper.

The first part of the paper is devoted to a review of the existing literature on the topic. The second part presents the theoretical framework of the study. The third part discusses the empirical findings. The fourth part concludes the paper.

no se debe meter y tes
- 993-



esta causa.

8.6.- Presentación dentro del término establecido en el art. 60 de la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional.-

La decisión judicial en contra de la cual se presenta esta acción extraordinaria de protección, es en contra de la sentencia emitida el 08 de septiembre de 2020, por los **Conjueces Nacionales Encargados**, Javier de la Cadena Correa y José Layedra Bustamante, integrantes de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia-

Por lo que estoy dentro del término de 20 días que contiene el artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que de acuerdo al artículo 46 del Reglamento de Sustanciación de procesos de competencia de la Corte Constitucional debe ser considerado desde la fecha en que se ejecutorió la sentencia, por lo tanto, me encuentro dentro del término legal.

8.7.- La acción no se plantea contra decisiones del Tribunal Contencioso Electoral durante procesos electorales.-

La acción extraordinaria de protección se presenta en contra de la sentencia emitida el 08 de septiembre de 2020, por los Conjueces Nacionales Encargados, Javier de la Cadena Correa y José Layedra Bustamante, integrantes de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, en consecuencia, no aplica el numeral 7 del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

8.8.- Solución de una violación grave de derechos, establecimiento de precedentes judiciales, corrección de la inobservancia de precedentes establecidos por la Corte Constitucional y sentencia sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional.

El trámite de la presente acción extraordinaria de protección permitirá resolver los problemas jurídicos relevantes antes señalados, estos son las connotaciones y aristas de los derechos a ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente, el derecho al debido proceso en la garantía de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en las garantías del derecho a la defensa, a no ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, a ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, a la presunción de inocencia y el principio de favorabilidad, cuya vulneración atenta al estado constitucional de derechos y justicia.

En este sentido es necesario establecer precedentes jurisprudenciales y hacer respetar los mismos para una plena consolidación del sistema de administración de justicia ecuatoriano, para que luego no se tenga que recurrir (insisto) a instancias internacionales en busca de una reparación de derechos.

9.-TRÁMITE Y PETICIÓN. -

De conformidad con el primer inciso del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ustedes señores Conjueces Nacionales Encargados, integrantes de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, deberán ordenar se notifique a la otra parte con esta acción extraordinaria de protección y **remitir el expediente original y completo a la Corte Constitucional en el término máximo de cinco días.**

No está por demás, indicar lo resuelto por la Corte Constitucional, en la sentencia de jurisprudencia vinculante **No. 001-10-PJO-CC, dentro del Caso No. 0999-09-JP, que es de obligatorio cumplimiento y señala respecto al trámite de la acción extraordinaria de protección lo siguiente:**

“2. ¿Cuál es el deber de la judicatura, sala o tribunal que dictó la sentencia definitiva ante la interposición de una acción extraordinaria de protección?

Las judicaturas, salas o tribunales que dictan una decisión definitiva, y ante quienes se interpone una acción extraordinaria de protección están impedidos para efectuar un análisis de admisibilidad, dicha competencia es exclusiva de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional. Las juezas y jueces, una vez recibida la demanda, deberán remitir el expediente completo a la Corte Constitucional en un término de cinco días, como lo dispone el Art. 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”. (resaltado y cursiva me corresponden)

Adicionalmente y si fuera pertinente, en relación a que las actuaciones realizadas y tramitadas por las instancias inferiores, **dentro del Juicio Penal No. 17721-2019-00029G**, se encuentren en esas instancias, **ruego que se requiera de manera inmediata a las respectivas judicaturas, que estas actuaciones sean remitidas inmediatamente a la Corte Constitucional del Ecuador**, para el examen de Admisibilidad pertinente, conforme a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y control Constitucional y de acuerdo a las prevenciones contenidas en el art. 46 de la codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de competencia de la Corte Constitucional.

10. DECLARACIÓN. -

Declaro que no he planteado otra acción constitucional por los mismos actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión.

11. CUANTÍA

Por su naturaleza es indeterminada

12. CITACIÓN CON LA DEMANDA. -

Para efectos de dar el trámite que corresponde a la presente acción extraordinaria de protección, se dignaran notificar a los doctores Javier de la Cadena Correa, José Layedra Bustamante y Milton Ávila Campoverde, **CONJUECES NACIONALES ENCARGADOS**, integrantes del tribunal de la Sala

The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups. It is a very general and superficial treatment of the subject, but it gives a good impression of the general situation.

The second part of the report deals with the economic situation of the country. It is a very detailed and thorough treatment of the subject, and it gives a good impression of the economic situation.

The third part of the report deals with the social situation of the country. It is a very detailed and thorough treatment of the subject, and it gives a good impression of the social situation.

The fourth part of the report deals with the political situation of the country. It is a very detailed and thorough treatment of the subject, and it gives a good impression of the political situation.

The fifth part of the report deals with the cultural situation of the country. It is a very detailed and thorough treatment of the subject, and it gives a good impression of the cultural situation.

The sixth part of the report deals with the future of the country. It is a very detailed and thorough treatment of the subject, and it gives a good impression of the future of the country.

The seventh part of the report deals with the conclusion of the report. It is a very detailed and thorough treatment of the subject, and it gives a good impression of the conclusion of the report.

The eighth part of the report deals with the bibliography of the report. It is a very detailed and thorough treatment of the subject, and it gives a good impression of the bibliography of the report.



Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, en la sede de la Corte Nacional de Justicia ubicada en Quito, en la Avenida Amazonas N37-101 y Unión de Periodistas.

13. NOTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES. -

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero constitucional No. 355 y casillero judicial No. 3879 del Palacio de Justicia de Quito, y en las siguientes direcciones electrónicas oswaldotrujillo@tscgroup.org y palizarzaburu@hotmail.com, pertenecientes a mis abogados patrocinadores, Oswaldo P. Trujillo Santillán y Pablo A. Lizarzaburu Castillo, profesionales a quienes de manera expresa autorizo, para que ejerzan mi defensa.

Firmo con mis abogados patrocinadores autorizados,

Víctor Manuel Fontana Zamora

Oswaldo P. Trujillo Santillán

ABOGADO MAT. 17-2012-26 F.A.

Pablo A. Lizarzaburu Castillo

MAT. 9369 C.A.P.

GROUP 1

1. The first group of students is responsible for the first part of the project. They will be working on the design and construction of the prototype.

2. The second group of students is responsible for the second part of the project.

3. The third group of students is responsible for the third part of the project. They will be working on the testing and evaluation of the prototype.

4. The fourth group of students is responsible for the fourth part of the project.

5. The fifth group of students is responsible for the fifth part of the project.

